FLACSO
CHILE
Biblioteca

B982p
DT. 331
c.2

DOCUMENTO DE TRABAJO
PROGRAMA FLACSO-SANTIAGO DE CHILE
NUMERO 331, Abril 1987.

BIBLIOTECA
FLACSO
SANTIAGO
12.374

276

PROBLEMAS Y DINAMICA DE LA POLITICA ECUATORIANA ACTUAL

Fernando Bustamante

Esta serie de Documentos es editada por el Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Santiago de Chile. Las opiniones que en los documentos se presentan, así como los análisis e interpretaciones que en ellos se contienen, son de la responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Facultad.

RESUMEN

La política ecuatoriana puede entenderse por la confluencia de un conjunto de problemas simultáneos que pueden ser descritos como propios de la condensación de tres problemáticas no resueltas: la lucha política de clases; la constitución de un Estado/nación unificado y de una escena política común; y, finalmente el del tipo de racionalidad de acción dominante en la vida cívica del país.

Es posible sostener que de los tres conflictos es el último aquel que toma un carácter más agudo a partir de 1972, y que buena parte de los alineamientos de la escena política y del sistema de partidos expresan los quiebres y contradicciones entre un "habitus" político estatista, legal/universalista y centralizante ("moderno") y uno particularista, familístico y subjetivo/patriarcal que se imbrican de maneras eclécticas y complejas con los procesos paralelos de formación de un espacio económico/social capitalista y cosmopolita; y con el proceso de constitución de identidades nacionales y sub-nacionales.

El actual gobierno de Febres Cordero, es interpretado como un avatar en el cual lo "tradicional/patriarcal" reabosrbe y somete, -disolviendo-; lo que se insinuó originalmente como un proyecto de refundación liberal-empresarial de la sociedad civil. A su vez, la oposición centro-izquierdista no debe entenderse tanto como un bloque "clasista", sino como una coalición de intereses estatistas, que plantean reformas sociales "desde arriba" (iluministas/ilustradas).

I INTRODUCCION

Comprender el carácter que revista hoy en día la política ecuatoriana implica la necesidad de entender la naturaleza de los problemas en torno a los cuales se estructura su vida pública. En otras palabras se debe intentar definir cuáles son los grandes tópicos en relación a los cuales las fuerzas políticas se constituyen, polarizan y dividen.

En esta forma, se trata de saber cuáles son las cuestiones que realmente importan, no tanto desde la coyuntura, sino en la perspectiva de un período histórico más o menos largo que está definido por la vigencia de una problemática específica y de un conjunto de respuestas posibles "típicas" que se disputan el terreno.

A manera de punto inicial de la discusión, nos atrevemos a afirmar que el Ecuador hoy en día es definido por tres constelaciones de conflictos que definen otras tantas dimensiones o espacios de lucha política, relativamente autónomos y que tienen su propio espacio o plano de desarrollo. A saber:

A. El conflicto entre clases: la lucha que surge de la constitución de un universo de relaciones económicas capitalistas y de intereses definidos por la ubicación de sus actores específicos unos frente a otros; y por la ubicación de estos actores frente a actores cuyas raíces sociales se ubican al nivel de la economía y sociedad precapitalista

(campesinado, latifundistas, etnias, ciertos sectores profesionales-burocráticos, pequeños propietarios tradicionales, etc.). Este tipo de conflictos son aquellos que aparecen abundantemente descritos y discutidos en la literatura marxista. A pesar de ello, es necesario señalar el carácter problemático del paso de los intereses y oposiciones sociales "objetivos" a la lucha ideológico-política propiamente tal. Sin querer entrar a este debate, cabría señalar que sea por vía de la "instrumentalización" de élites o vanguardias por parte de las clases, sea por la constitución desde la política de actores sociales; tan solo potenciales antes de la acción político-organizadora; podemos constatar la presencia efectiva de actores sociales de "clase" en la vida pública, y de actores políticos cuyo referente de acción son intereses definidos explícitamente o implícitamente como vinculados a clases, coaliciones de clase o fracciones de clase.

B. Otro espacio de conflictos "perpendicular" al anterior, son los que tienen que ver con la forma de constitución de la noción práctica de lo "nacional". La lucha por determinar el contenido de la idea de comunidad nacional: quiénes pertenecen, de qué manera, en torno a qué valores, con qué derechos y deberes, con qué diferente acceso a recursos materiales o de coordinación colectiva. Ecuador es un país

que se caracteriza precisamente por la secular no resolución del problema de formación de un cuerpo civil homogéneo y unificado en términos de referentes culturales, valóricos y simbólicos coherentes y universalistas. Los esfuerzos que en ese sentido se han hecho desde la colonia hasta el presente sólo han logrado suspender la eclosión del problema, el cual siempre ha operado "sotto voce" bajo la forma de conflictos micro-sociales, del "malestar" de los intelectuales y de puntuales estallidos "volcánicos" cuando ciertas circunstancias así lo han permitido. Ecuador, contrariamente a Colombia y al igual que el Perú y Bolivia existe como unidad política sin que esa unidad política exprese la unidad del sustrato social y étnico en que se sustenta. El conjunto de problemas que aquí se expresan, en forma más general, podrían definirse como los que emanan de la incapacidad histórica de un sistema de acción colectivo por producir la relación clásica e "iluminista" entre Sociedad Civil y Estado, en el cual este último sería la expresión universalista de la vida social inmediata. En este caso, este último espacio social/sustrato no ha logrado formarse en tanto igual a sí mismo y por tanto el Estado mal puede funcionar como expresión de algo que no es expresable universalmente a la manera del Estado "ideal" del pensamiento clásico (de Rousseau a Marx pasando por Hegel Cf. filosofía del Derecho) (1).

Esto nos lleva a la necesidad de entender las luchas civiles/políticas en Ecuador en términos de la búsqueda de esa forma social universal aún no construida a pesar de la existencia formal de símbolos y aparatos "estatiformes", que lo presentan como existente, bajo la misma figura de animación "ersatz" que el robot tiene frente al ser "realmente" vivo.

C. Un tercer espacio de problemas dice relación con la definición del tipo de "lógica" de acción política que deberá predominar en la vida pública. En otras palabras se trata de conflictos en torno a la hegemonía de formas de orientación de la acción, que en Ecuador se superponen e interpenetran de manera abigarrada.

En efecto, la dimensión modernidad/tradición sigue orientando los dilemas de los actores políticos ecuatorianos mucho más que en otras sociedades que han logrado cristalizar un mundo de orientaciones donde la racionalidad instrumental "burguesa" tiene clara hegemonía (2).

El mundo de la política y la vida cotidiana del poder y el intercambio social en Ecuador se hallan aún fuertemente controlados por las formas de acción particularistas, no institucionales, basadas en lógicas de don y de reciprocidad familística (real o ritual); más que en las normas y orientaciones de búsqueda universalista de metas "racionales"; canalizadas a través de instituciones,

organizaciones impersonales y normas abstractas (3). La lógica dominante es aún, en muchas interacciones sociales, la que Bourdieu describe al referirse a las sociedades de la Khabila Maghrebina, centradas alrededor de estrategias de acumulación de valor o prestigio social más que de mercancías (al estilo capitalista) (4). Cuando este síndrome se traspone al plano del Estado, se expresa en la predominancia tozuda de formas de práctica política caudillista (importan los lazos de "lealtad" recíproca con el líder) clientelar, familística y de gavilla o banda.

Incluso, tal como lo sostienen Burbano y Espinoza en un documento inédito del CIESE, esta forma tradicional de hacer política es capaz de utilizar para su reproducción ampliada a instituciones o lógicas de acción que formalmente y "prima facie" se presentan como "modernas" racional-legales o impersonales, orientadas por normas universalistas (5).

En todo caso la conflictualidad en este espacio surge del hecho de que sin duda el desarrollo del capitalismo y de prácticas nacidas en el terreno de la "modernidad", ponen a la forma familística de hacer política en la necesidad de tensionarse para asimilar o rechazar, o de alguna manera controlar, el surgimiento de actores sociales portadores de lo moderno dentro de su sistema de necesidades, y de enfrentar la presión de estos últimos por imponer las formas institucionalizadas, formales y universalistas "de hacer las

cosas", (i.e. profesionales de la tecnocracia, ciertos (pero no todos) capitalistas, burócratas militares, etc.).

En resumidas cuentas; el dilema del actor de guiarse por orientaciones tradicionales o modernas se traspone en el plano político y en los conflictos sociales y política respecto a cuáles han de ser las formas de acción que más típicamente han de caracterizar al Estado, y en fin de cuentas en torno al carácter que ha de revestir el funcionamiento del Estado: clientelar, familístico y particularista, o bien universalista, racional-legal e impersonal. Este conflicto se expresa en choques entre grupos que expresan concepciones y prácticas del cómo hacer política radicalmente distintas entre sí, y potencialmente opuestas. Un ejemplo sería la oposición radical entre el estilo político y la concepción de lo que es gobernar que separa a alguien como el ex-Presidente Oswaldo Hurtado, de lo que expresa como quehacer alguien como el ex-Presidente del Parlamento: Averroes Bucaram.

En suma el espacio político ecuatoriano puede ser descrito como un sistema de dilemas simultáneos que genera tres ejes privilegiados de enfrentamiento político; en principio autónomos entre sí, y solo articulables, a posteriori, como resultado de prácticas politicas concretas no determinadas en la naturaleza misma de cada una de las contradicciones.

Por ejemplo, no hay nada que intrínsecamente lleva al Social-Cristianismo, en tanto proyecto político de fuertes contenidos clasistas (reforma burguesa del Estado); a tener una afinidad electiva con el populismo tradicional que el CFP representa. Es más, en tanto proyecto de clase (y solo en este aspecto que no agota su naturaleza) más bien podría pensarse opuesto y latentemente antagónico al cefepismo y a su voracidad re-distributiva. Sin embargo, los requerimientos de una táctica específica de poder y de gobernabilidad los llevan a forjar alianzas "anti-naturales" desde una perspectiva "económico-política", pero totalmente comprensibles desde una perspectiva más amplia de estrategia coalicional. Es claro que semejante "pacto" no deja de implicar pesadas hipotecas sobre el proyecto liberal originario, y debilita su factibilidad, tal como lo demuestra la forma inconsistente, débil y parcial en que se trata de implementar durante el segundo año del Gobierno de Febres Cordero. El "hacer politica" es una lucha donde también se resuelve (mediatamente) la posibilidad de una política de clases. Sin una desaparición o debilitamiento del tradicionalismo, una política puramente clasista es inviable, porque las clases simplemente no se constituyen como en los manuales de economía política.

Finalmente, cabe hacer la salvedad de que estos fenómenos se articulan e imbrican de manera peculiar con el desarrollo

y penetración de una economía capitalista. La pregunta es cómo esta última interacciona y se rearticula a sí misma con referencia a una sociedad política armada de acuerdo a principios al menos no típicamente asociados a la difusión de las formas económicas del capitalismo. La experiencia indica, en todo caso, que modernidad y capitalismo son dos fenómenos relativamente autónomos, que no siempre marchan "pari-pasu" ni se potencian mutuamente. Cabe, pues señalar como problemática en Ecuador, la compleja relación entre la economía moral del familismo político y social y la lógica impersonal de acumulación del capital, una relación que no suponemos a priori antagónica, sino que generadora de adicionales dilemas y ejes conflictos en ambos ámbitos y en la escena política como un todo.

Es la lógica que también comparte la organización feudal de la política en Europa (6) aunque la palabra feudalidad ha adquirido distorsionadas connotaciones por su abuso semántico en la polémica política corriente.

Ahora bien, no se pretende aquí (valga la aclaración) de que la política "tradicional" se superpone encubriendo actores constituidos a priori, bajo otra lógica (i.e. la acumulación del capital). Más bien, la idea es que en política tradicional, la división de lo político/económico es extemporánea. En la política tradicional, los entes políticos son además y nacen como entidades sociales, como

redes sociológicas de interacción que definen identidad y autoconciencia. Los grupos cacicales son para todos los efectos prácticos sujetos sociales diferenciados, uno de cuyos cruciales mecanismos generadores es la política (entendida como la entendemos y no "modernamente"). No hay aquí pues, ninguna noción de "mistificación" de intereses objetivos de clase por parte del "cacicalismo" político. El "cacicalismo" inhibe su constitución porque los articula a su manera. Claro es el ejemplo del obrero urbano que no requiere devenir tal como miembro de un sindicato, cuando más factible parece el atajo de convertirse en cliente de un patrón, o de un político o de un dirigente <u>en tanto caudillo</u> más que en tanto <u>funcionario</u> de un movimiento obrero putativo.

Por lo tanto se lucha por la <u>forma</u> sociedad y por el modelo que se busca imponerle, un "logos" impersonal que es su forma de vida "ideal". En el fondo el sujeto político moderno es trascendente, dispuesto a sacrificios inmensos y al sacrificio de su propia realidad de clase en aras de ese "todo" (destino racional) del cual es (a pesar suyo a veces) portador y garante.

En la lógica "tradicional" de la reciprocidad y de la acumulación de "honor" por parte del caudillo (forjado sobre el arquetipo del pater familias) (7), no hay tal trascendencia ni tal "todo", la gente se arrima al hombre que

puede "dar": al prioste, al patrón de hacienda, al cacique barrial, al presidente populista; y lo hace mientras este pueda derramar sobre sus cabezas el don gratuito, sin intercambio equivalente (lo cual sería una mera transacción comercial), lo que así se resuelve es la reproducción ampliada de la identidad social, pero esta identidad define a los individuos ya no como obreros o artesanos o burgueses, sino en una "nomenclatura" familiar, un poco al estilo de las grandes "familias" de la maffia siciliana que aunque agrupan vastos intereses de diverso origen genético, son entendidos por referencia a una estirpe simbólica construida sobre el núcleo originario de una verdadera estirpe genealógica.

La política como lucha de entes económicos se transpone en lucha de "bandas", organizadas de acuerdo a la lógica del favor, del don, de la reciprocidad y del hombre fuerte (i.e. proveedor de sus seguidores). Pandillas familísticas o "máquinas" prebendarias centradas en torno a la cuestión del reparto (competencia distributiva) y de la circulación (reciprocidad) delos bienes materiales y simbólicos; pero con la salvedad de que los primeros pueden fácilmente dejar de ser el objetivo final de todo el negocio para convertirse en medios de acumulación de capital "simbólico" (honor). En efecto, el caudillo o el cacique reparten y distribuyen no tanto para acumular ellos la riqueza que pasa por sus manos. Al contrario, desacumula (Velasco Ibarra no se enriqueció, y

Asaad Bucaram parece haber sido relativamente honrado él), pero debe permitir que su clientela sí acumule para que así ésta le deba el favor, deuda que se traduce bajo la forma no equivalente de honor, respeto, carisma que luego son intercambiados por apoyo político, votos, obediencia. La función del caudillo es dar (no recibir), para acumular el honor que funciona como una carta de cambios que se cobra en movilización política a su favor.

En todo caso este mundo que se refiere a una economía moral de la política más que a una política en términos tales como los ha concebido la "modernidad" (movilización ideológicamente regulada en pos de un interés universal), no puede organizar a los clientes como clase en lucha, porque la clase como actor político está constituída en torno a los imperativos éticos de la modernidad. Es más, podría arriesgarse la idea de que precisamente porque el problema respecto a de qué forma y por qué tipo de élite política ha de dirigirse el país no está resuelto o ha sido resuelto (provisionalmente) de formas determinadas; es que el problema político no ha podido plantearse centralmente (sino solo en los márgenes) como problema de clase. Ecuador no tiene una dominancia de la política de intereses económico/políticos porque aún su política gira en torno a la forma de desarrollar y de dar realidad estatal y cívica a dichos aún incoados intereses. E incluso, cuando la lucha ha sido

(provisionalmente) resuelta, normalmente a favor de las élites tradicionales; esta resolución ha implicado una forma de hacer política y de conducir el gobierno de la república que ha tendido a desintegrar los lazos clasistas o corporativos de los grupos dirigidos, para rearticularlo en torno a nuevas realidades sociológicas estructuradas en torno a lo político. Así, el partido populista, la "máquina" electoral, el gobierno clientelístico-cacical articula a los seguidores como "deudores" o "clientes" o "familiares simbólicos" antes que como sujetos de clase o portadores de intereses económicos. Por decirlo en pocas palabras, el clasismo/economicismo cede su lugar al familismo político y lo constituye en eje articulador de los sujetos políticos y del Estado. Es a través del favor, de la lógica del don (8) es que los grupos que se enfrentan en la política ecuatoriana toman realidad unos frente a otros. Y en esos términos se enfrentan no como clases, sino como grupos sociales de lealtad subjetiva.

Este conflicto tiene expresión en las alternativas caudillo/tecnócrata; clientelismo prebendario/universalismo racional-legal; familismo/burocratismo; lógica de la reciprocidad/lógica de tipo "imperativo categórico" (universalismo ético); entre partido cacical/partido orgánico de masas, entre localismo/centralismo; entre corporatismo/estatismo. Todas estas oposiciones definen una

constelación de formas políticas que requieren de portadores específicos, no intercambiables, y que una vez constituídos como sujetos históricos, desarrollan luchas objetivamente fundadas que han dado la temática a una parte importante de la cuestión política en el Ecuador contemporáneo.

Esta lucha es una lucha en donde los grupos dirigentes cuya supervivencia como tales (como "intelectuales del Estado" y como "clase política") depende de la reproducción de una forma determinada de hacer política (pensemos en el destino de Velasco Ibarra y sus agentes en un sistema político de partidos de masas dirigidas por tecnocracias políticas profesionales, como en la Europa actual) y se confrontan de manera autónoma pero articulable con los intereses de clase civiles. Pero en este caso, lo que está en juego no es la predominancia de una lógica de clases sobre otra, o la supervivencia de sistemas de necesidades basados en la economía política (9); sino la capacidad de unos u otros grupos potencialmente dirigentes por reclamar para sí el derecho y la fuerza de organizar y dar una forma determinada a estos intereses potenciales, o sea, de darles una realidad política determinada, o de trasmutarlos bajo formas concretas en lucha política de clases o de intereses civiles del género que sea (regionales, étnicos, corporativos,, etc.).

Ahora bien, creemos posible plantear la plausibilidad de

la siguiente hipótesis: que lo que caracteriza y especifica a la escena política ecuatoriana en los últimos 60 años (al menos desde la Revolución Juliana) de 1925, es una dinámica política que enfrenta a grupos organizadores ("intelligenzias" y élites de poder) en torno a la cuestión de la modernidad y en torno a la cuestión asociada referente a cuáles deben ser los mecanismos propios de articulación del Estado y del Estado con los ciudadanos y las categorías sociales y étnicas a través de las cuales esta ciudadanía se mediatiza.

La cuestión que ha desestabilizado sistemáticamente la vida política del Ecuador, o, que, en su defecto le ha proporcionado las formas específicas de estabilidad que le han caracterizado, dice relación no tanto con el problema del contenido del pacto social que deberá subyacer al poder (cuestión de la lucha de clases), sino más bien con el problema de definir los principios y de acción y orientación que deberán guiar al poder en su proceso de constitución como tal y de constitución de los grupos dirigentes portadores de un proyecto de hegemonía.

Esta lucha puede expresarse en figuras más concretas como el problema de definir para todas y cada una de las clases, intereses y facciones civiles el tipo de dirigente político que ha de hacerse cargo de esta tarea, el tipo y mecanismos de conducción del aparato del Estado, el tipo de organización

burocrática, el tipo de valores y cultura política que ha de primar en definitiva como argamasa de unión entre los elementos de la nacionalidad.

II LA ETAPA POLITICA CONTEMPORANEA 1972-1986

Para comprender la actual coyuntura política que vive el Ecuador, es necesario enmarcarla dentro de un período más amplio dentro del cual haga sentido. Este sentido debe desprenderse de la posibilidad de incluir al momento presente en un horizonte temporal que defina los parámetros de lo que en el presente está en juego. En la primera sección hemos postulado que tres tipos de conflictos constituyentes de la lucha política ecuatoriana; en la actual queremos ver cómo estos se despliegan en el tiempo, y cómo su presencia combinada, se hace relevantes en cierta fase histórica y no en otra.

Creemos que la información disponible, permite suponer que las tres dimensiones convergen por vez primera en la definición del espacio político ecuatoriano a partir de la década de 1970-80, y que su "maduración" como ejes conflictuales coincide con la experiencia del régimen militar del gobierno del gral. Rodríguez Lara, y de la Junta Militar que lo sucedió en 1976 (10).

Se han hecho varios intentos por tipificar el carácter de clases de la política del régimen castrense (11), sin embargo, existen serias dificultades por reducirla a algún paradigma que se apoye exclusivamente en una lógica de representación de intereses fraccionales, clase o de grupos de presión. Asimismo, tampoco parece ser suficiente una

explicación basada que haga hincapié en los intereses exclusivamente corporativos de la oficialidad. Tales o cuales políticas pueden sin duda adscribirse a uno u otro de estos factores, pero el conjunto del significado e impacto del régimen militar no parece ser comprensible recurriendo a éstos.

Se ha argumentado, por ejemplo, que el gobierno militar representaba los intereses de una emergente burguesía industrial nacional (12). Un análisis más detenido revela que si bien sus políticas estaban en buena medida orientadas en el sentido de promover el desarrollo de un sector industrial orientado al mercado interno; i) la burguesía industrial "real" no fue nunca entusiasta de este modelo, y, llegado el momento se sumó a la oposición de los sectores empresariales agrícolas ligados al comercio exterior; ii) que esta "burguesía nacional" estaba fuertemente imbricada con las fracciones más tradicionales y que, por tanto sus intereses no eran en exceso contradictorios con los de estas últimas (13); y, iii) que el problema central que separó al sector empresarial de los militares tiene que ver no con el contenido de las políticas promovidas por estos últimos, sino que con el problema de quién debería dirigir el Estado. En otras palabras. El desacuerdo de las Cámaras con el régimen castrense tenía como foco, no tanto que estas consideraran sus políticas como desacertadas o perjudiciales a sus

intereses corporativos, sino que lo que se disputaba era el derecho a hacer política. Para las élites empresariales el escándalo estribaba no en lo que se hacía, sino en quién lo hacía. Las cámaras y los civiles vinculados a ella, encontraban la pretension de las tecnocracias civiles y militares de asumir la representación de los intereses genéricos del capital. La visión empresarial dominante en Ecuador concebía al Estado y al poder como patrimonio y resorte directo de los grupos económico/corporativos civiles. Lo que se jugaba era, por tanto, el problema de una noción de representación política de intereses a través del Estado, entendido como burocracia de expertos que asume y mediatiza como "interés general", los intereses civiles hegemónicos; contra una concepción en que el Estado no es sino una extensión linear homogénea con el campo de las relaciones sociales civiles. La primera concepción que supone un concepto de Estado "racional", post-Hegeliano, y la moderna concepción burguesa de un espacio político articulado en la dicotomía Sociedad Civil/Estado. Esta última era la que los militares y sus asesores civiles tecnoburocráticos impulsaban de hecho. Era su aspiración convertirse en la "inteligencia orgánica" de la dominación de ciertas fracciones putativamente "nacionales" del capital. Pero debe anotarse, que para que la propia burguesía aceptara este trato era preciso que aceptara también una concepción del Estado y de

su funcionamiento, según la cual deberían ser representados, separando de su inmediatez cívica la esfera del gobierno y de la universalidad para alienarla en representantes que expresan, en su propia práctica inmediata, la forma del interés general.

Esto último es lo que el capital (expresado en las cámaras de la producción) rehusó hacer. La idea de alienar su poder dirigente en "expertos" de una burocracia centrada en el aparato de Estado, les fue irritante y no se presentó como necesaria. Se vio como mera usurpación, como un acto de confianza riesgoso, sin garantías, y en último término peligroso.

La raíz de este rechazo a entrar en el pacto propio al Estado moderno; debe buscarse en el "ethos" político propio de las organizaciones empresariales ecuatorianas. En su discurso y práctica se resalta la voluntad de dirigir el Estado directamente; "desde la casa", por usar una metáfora. El poder político es así visto como atributo de la propia inmediatez de la vida civil. Esto revela una indistinción de esferas. Una tendencia a ver la vida del Estado como otra cara y como atributo de la vida social y económica inmediata del propietario. En otras palabras: al poder como patrimonio que se pierde al enajenarse. Una visión del poder como lo que se ha esbozado, bloquea la formación de estructuras abstractas de representación, y la generación de clases de

profesionales especializados de la política, que sin ser burgueses ellos mismos pueden ser encargados de formular de manera general y racional el interés colectivo de las clases hegemónicas.

Al rehusarse a enajenar su poder en representantes estatales (deseosos de iniciar tal pacto), el capital ecuatoriano revelaba su noción más profunda de la política. La política se les aparece como actividad que es simplemente otro ámbito de explicación de la lógica de la propiedad (patrimonio), y como tal atributo personal, inseparable del individuo poseedor. El poder no es pacto o contrato (14), sino atributo; posesión natural que extiende y amplía los ámbitos de la familia y la socialidad productiva inmediata. Aquí podemos fácilmente reconocer las huellas de una forma de vivir la política de corte "tradicional". La discusión no se centra en torno a aquello que se legisla desde el poder, sino en la lógica como ese poder se construye para unos y otros. Las cámaras retiran su apoyo al régimen militar porque se rehusan a convertirse en clase, en el sentido burgués de la palabra. Es por ello, asimismo que en Ecuador los intereses de los propietarios se expresan gremialmente más que partidariamente. Los militares y sus asesores procuraban tratar y hacer del elemento propietario la base política de un Estado burgués "moderno". Se los rechazó no porque dañaran los intereses de la propiedad en tanto

quehacer económico y en tanto relación social, sino que debido a que dañaron su imagen de lo que significaba hacer política y tomar decisiones políticas (y a quien correspondía tomarlas, y con qué criterios).

Ahora bien, se ha considerado que los sectores propietarios ecuatorianos han tenido sus partidos propios, que, con mezclas diferentes, han expresado sus intereses de clase a nivel estatal (15). A la luz de lo señalado en los párrafos anteriores, es necesario volver de nuevo la mirada sobre la naturaleza de estos partidos y observar su modo de funcionamiento. La información disponible permite afirmar sin gran temor a equivocarse, que estos obedecieron estrictamente al patrón de partidos patrimoniales, a clubes de notables; en los cuales el papel de caudillo significaba la extensión de las relaciones intra-clasistas de influencia y respetabilidad para proyectarlas, sobre un público plebeyo (caso del velasquismo). En otras palabras, los partidos civiles tradicionales operaban como instancias de concertación de los patriciados locales, y como extensión de las relaciones familísticas al ámbito de una "res pública" que aún no adquiría claros stándares de diferenciación con respecto a los asuntos privados colectivos de una serie de grupos dominantes de implantación regional y asentados sobre la base que proporcionaba sociedades locales, que operaban como comunidades jerárquicas, de las cuales el patricio era

parte integrante, no solo como empleador o "gran hombre" sino como agente funcional de la integración de la comunidad (16). El patricio era lo que era, no solo por la riqueza que controlaba, sino por su participación en la vida completa de su entorno social (como "padrino", "valedor", "patrón", "cacique", auspiciador de ceremonias, sistema de seguridad social, amparador, etc.).

Este sistema de manejo del poder era relativamente autónomo del tipo de política que se planteaba y de los intereses "económico-corporativos" representados. Por ejemplo, los grupos agroexportadores costeños, típicamente liberales, defendían políticas y métodos de acumulación claramente mercantiles basados en relaciones de producción salariales. Eran un sector claramente empresarial. Pero ello no les impedía el recurso -descontadas especificidades regionales- a métodos de gestión política "patricios". Las lealtades del elemento social subordinado seguían sosteniéndose a través del caciquismo más que del mercado, por mucho que este mercado existiese y operase efectivamente. De algún modo la sociedad ecuatoriana buscaba, y lograba encapsular lo mercantil (la economía política), como un ámbito restringido de conductas y actitudes, que no lograban, ni interesaba que permearan el cuerpo civil de manera tal de teñirlo de pies a cabeza con sus propios matices. En cierta forma los partidos ecuatorianos funcionaban de acuerdo al

modelo explorado por Ostrogorsky (17), en el caso de los Tories ingleses antes de las reformas de Disraeli. Los patricios serranos complementaban las formas "más crudas" del caciquismo del propietario costeño, con el recurso a las fuertes raíces hispano-quichuas del mundo cultural de la hacienda y de la Iglesia y con su ineludible coexistencia con el mundo indígena, pero, de manera más complicada tal vez, operaban de acuerdo a principios de racionalidad similares.

El régimen militar de 1972 puede ser interpretado, entonces como un esfuerzo (no el primero, pero sí el más profundo), de una élite burocrática "marginada" de las redes clientelares, por introducir en el manejo del Estado criterios novedosos, antagónicos con la cultura política dominante. Para esto se apoyan en sectores civiles que pretenden cumplir el rol de intelectuales "modernos" y que de algún modo han adquirido contemporáneamente, al igual que los militares, esos márgenes de autonomía social, como para que su vida no se hallase definida por completo por el viejo modo de hacer las cosas.

La historia de la emancipación militar de la tutela "patricia" puede ser vista a través del estudio de Ficht sobre los militares y la política en Ecuador (18). El citado proceso arranca de 1944 y culmina en la década de los años 50. La manera y razones de esta segregación o autonomización relativa de las FF.AA. con respecto al mundo del

patrimonialismo, pueden comprenderse como una necesidad de supervivencia y desarrollo de una institución militar que debe hacerse "moderna" para sobrevivir como tal y hacer frente a desafíos sociales y geopolíticos (conflicto con el Perú), y que construye su fracaso en 1941 en la guerra con el Perú como efecto y resultado de la conducción civil tradicional (ver Fitch op.cit.).

Esta reconstrucción de las FF.AA. las lleva a marginarse de la politica entre 1944 y 1961 como medio de hacerse capaz de autodeterminarse como institución "profesional"; esto es: regida por las normas de un "buen hacer" corporativo que se construye sobre nociones de desempeño técnico-profesionales y que asimilan el perfil cultural de instituciones basadas en normas universal-racionales. No es casualidad que en los años 50 se organiza una Academia de Guerra en el modelo chileno y con la asesoría de oficiales de esa nacionalidad.

En el período que nos interesa, las FF.AA. ecuatorianas se encuentran con un mundo político que sigue siendo aquel que, de acuerdo con su diagnóstico, es la causa de su debilidad histórica, y de la debilidad del Ecuador como nación capaz de proveer a su propia seguridad. Asimismo las FF.AA. ecuatorianas chocan repetidas veces con los esfuerzos de los civiles por subvertir su profesionalismo reintroduciendo en su seno las prácticas del clientelismo y del particularismo. Sus conflictos con Velasco Ibarra, por

ejemplo, casi invariablemente están ligados a los intentos de éste por hacer extensivo su comportamiento político de caudillo tradicional, a los cuarteles. En algún momento las FF.AA. llegan a la conclusión de que ellas como aparato de Estado, sólo pueden desarrollarse y sostener su autonomía frente al mar del "clientelismo" corporatista civil si emprenden la tarea de reformar a este último a fin de ponerlo al paso del desarrollo de las propias FF.AA.

En otras palabras, 1972 surje de hecho de la constatación práctica que hacen los militares que no es posible una defensa nacional "moderna", profesional, burocratizada, en un Estado y para un Estado anti-moderno y patrimonial que contumazmente reitera sus intentos casi automáticos por absorber la anomalía que ellas representan dentro de su universo simbólico.

Era pues preciso reformar la política, pero no en el sentido de redistribuir los medios de acción, sino en el sentido de cambiar su naturaleza; profesionalizando y modernizando el Estado. Este es el desafío crucial que el régimen militar aparece asumiendo.

No tenemos una historia similar con respecto a los grupos intelectuales civiles que aparecerán vinculados al régimen militar a partir de 1972. Estos ya habían hecho su aparición en la Junta de 1963-66, pero su peso y dimensión es mucho mayor bajo Rodríguez Lara y sus sucesores. Queda como tarea

pendiente un estudio sobre la formación de los nuevos intelectuales civiles de Estado en Ecuador, lo cual aparece doblemente necesario debido a que su rol se hará aún más destacado a partir de la retirada militar a los cuarteles en 1979.

En todo caso, y para resumir, creemos que se puede sostener que el régimen militar de Rodíguez Lara representó un esfuerzo de las FF.AA. por asumir el rol de agentes de la imposición de la hegemonía de una racionalidad formal estatista "moderna", de estilo post-hegeliano, en el seno de una sociedad política civil dominada hegemónicamente por formas patrimonialistas de hacer política.

Esta última afirmación puede ser avalada ulteriormente por la constatación de que el esfuerzo más firme y consistente del régimen se concentró en el desarrollo del Estado, en el de sus medios instrumentales, en la formación de cuadros y organizaciones tecnoburocráticas, y en aumentar su penetración y control sobre el espacio social, a niveles inéditos en el Ecuador (19). En muchos otros aspectos el régimen fue vacilante, pendular o inconsecuente, pero en lo que fue unívocamente persistente fue en el esfuerzo por conseguir potenciar al Estado tanto como aparato como en tanto noción y como forma de hegemonía en la cultura política nacional.

III. LA TRANSICION Y EL NUEVO REGIMEN CIVIL

El proceso de retorno a los cuarteles que se inicia en 1976 tiene para los militares una doble cara: defensiva y hegemónica.

El detonante que convence a las FF.AA. de la necesidad de entregar el poder a los civiles es el proceso acelerado de fraccionamiento y reclientelización de su institución que hace crisis en el dicho año y que se expresa en el fallido golpe de González Alver (20). Este proceso adquirirá caracteres aún más agudos a partir de aquel año. Los partidos políticos tradicionales y los grupos corporativos empresariales logran crecientemente imponer una lógica de paulatina erosión de la unidad y coherencia orgánica de las FF.AA. Así comienzan a surgir diversas "cliques" conspirativas al viejo estilo, en que diversos altos mandos comienzan a actuar en función de lazos clientelísticos con sectores y grupos civiles. Esto amenaza no solo con dar al traste con el proyecto de corte reformista "hacia afuera" de los militares, sino con el fruto de 30 años de laborioso esfuerzo por consolidar un sistema militar "moderno-nacional". Las FF.AA. a través de sus sectores más profesionalizados ven con temor este paulatino proceso, en el que el control sobre el funcionamiento de las instituciones de la defensa se les escapan como agua entre las manos. La solución que logra el mayor consenso se centra en torno a un

BIBLIOTECA
FLACSO
SANTIAGO

programa mínimo consistente en acelerar la retirada de la escena política. Se trata de montar un repliegue salvador que aleje a los militares de un espacio de interacción política en el cual crecientemente los oficiales se veían tentados de convertirse en agentes y partícipes en las formas tradicionales de hacer política, con el riesgo que ello entrañaba para la preservación de la consistencia institucional lograda.

Sin embargo, este repliegue defensivo y autoprotector no podía hacerse en los términos de la política civil tradicional. No podían las FF.AA. resignarse a volver a un "statu-quo ante" que dejaría una vez más incólume los problemas que habría desembocado en sus anteriores intervenciones. La experiencia de 1966-72 era sumamente aleccionadora. En 1966 las FF.AA. habían entregado el poder a las fuerzas civiles tradicionales en los términos impuestos por éstas. El resultado había sido un período en el cual las mismas crisis y factores de desgobierno que habían motivado la intervención de 1963, se reprodujeron con igual o mayor virulencia. Esta retirada precipitada en 1966 había preparado las condiciones para que entre 1970-72 se volvieran a reproducir las mismas presiones y las mismas crisis del período anterior, las cuales habían llevado a que las FF.AA. se hubiesen sentido obligadas a ocupar el poder nuevamente. Si se trataba de aislar a las FF.AA. de la disolvente

política civil, era preciso evitar que esto se hiciera en condiciones que, al poco andar, las obligaran nuevamente a verse envueltas en ella. Esta vez se trataba de crear una política y un sistema estatal civil que contuviesen garantías sustantivas de que no sería necesario implementar nuevas intervenciones militares. Era preciso organizar un sistema político que no requiriera garantías de una presencia "moderadora" ni cíclicamente "fundacional" de la fuerza militar.

El sector militar representado por el Almte. Paredes y el Gral. Richelieu Levoyer encaminan, en este período, toda su acción política a desarrollar este marco en el cual el profesionalismo militar se pudiese ver garantizado desde el sector civil.

Esto requería -en su concepto- crear un sistema constitucional que expandiera poderosamente la capacidad y el rol de los sectores modernos de la "intelligentsia civil", los grupos tecnoburocráticos, y los de aquellos grupos sociales que estos últimos podían movilizar al margen, y competitivamente, con respecto a los grupos tradicionales. Se trataba de asegurar la participación ampliada de los nuevos grupos sociales dotados de intereses que se suponían vinculados a la "modernización" del aparato público, y el de sus respectivas "cúpulas" dirigentes. Era preciso crear un marco en el cual estos tuvieran la posibilidad de disputar el

terreno exitosamente tanto a los caudillismo patrimonialistas como a los populismos "plebeyos" (representados eminentemente en el CFP), desplazándolos y asegurando una conducción profesional y "racional" del Estado.

La dura lucha que se desarrolla entre 1976-79 en torno a los dos proyectos alternativos de constitución: el apoyado por los partidos tradicionales y las notabilidades cacicales y empresariales, y el sostenido por los grupos más progresistas de las FF.AA. y los nuevos partidos de lo que se denominará "centro-izquierda" (social-demócratas, democristianos y demócratas) tiene este problema crucial como trasfondo. El Proyecto de nueva Constitución estaba diseñado tanto en su substancia como en su proceso de elaboración para minimizar el rol de la política tradicional: ejemplo de ello es la supresión de las senadurías y diputaciones "funcionales", la unicameralidad Parlamentaria, el principio de no-reelección, la expansión del voto, la consagración del rol de las entidades estatales creadas en la década anterior, la regulación de los partidos políticos y las disposiciones tendientes a fortalecerlos en tanto aparatos orgánicos y programáticos; la introducción de la segunda vuelta electoral en caso de no haber mayoría absoluta en una elección presidencial; el mandato de entregar el Ministerio de Defensa al oficial de más antiguedad en las FF.AA., etc.

Este conflicto dividió tanto a los civiles como a los

militares pero, después de innumerables alternativas, conspiraciones (21), y vaivenes, el bloque de civiles "modernizantes-reformistas" y de militares "profesionalizantes/hegemónicos" logró imponer su proyecto, primero en el referendum constitucional de 1978, y luego al lograr la elección del binomio Roldós-Hurtado en las presidenciales de 1979.

El régimen de Roldós-Hurtado puede ser considerado como el remate y coronación de este proyecto militar de reorganización profesional del Estado. Los gobernantes y sus fuerzas civiles de apoyo presentan por primera vez en Ecuador las formas de un régimen político "en forma" basado en partidos y aparatos burocratizados, racionales y universalista-normativos. El "ethos" político de éstos es el "ethos" de la ley y del Estado como estructura impersonal de convivencia. Por primera vez en mucho tiempo, el poder civil no debe ser compelido a respetar y potenciar los espacios de competencia profesional de las FF.AA. sino que es escrupuloso en promover su profesionalismo y, dentro de los límites que la crisis exportadora va poniendo progresivamente, sus necesidades de tipo material y técnico.

El régimen Roldós-Hurtado se presenta, pues, como la consolidación y aparente éxito póstumo del régimen militar que lo precediera. Con él parece desterrarse las viejas presiones clientelísticas sobre las FF.AA.; se impone un

"ethos" profesionalizante en todo el aparato del Estado, se profundiza, de hecho, el estatismo, en el sentido de la consolidación de una forma estatal-universal de hacer política en el aparato público.

Una serie de síntomas permiten pensar en 1980-82 que el cambio logrado podía ser de rápida consolidación. Para empezar, las tendencias electorales muestran un explosivo avance y desarrollo de los partidos nuevos de la "modernización" a costa de un derrumbe generalizado de los partidos tradicionales. Solo el populismo "plebeyo" del CFP y el auge transitorio del Frente Radical Alfarista (FRA), parecen ir contra la marea. La Izquierda Democrática, por ejemplo, pasa a ser el primer partido del país y la Democracia Cristiana adquiere un peso inusitado que lo lleva de ser un mini-partido en 1978 a una fuerza de primera línea. Auges similares experimentan demócratas, roldosistas (22) y en menor medida ciertos sectores de izquierda. En todo caso, parece ser que el Ecuador vive un "realineamiento crítico" de su escena política, de profundas consecuencias. Baste señalar que, mientras en 1968, los partidos tradicionales representaban el 85% (aproximado) de la votación; en 1980 controlaban menos del 25% y su declinación parecía ser tan galopante como irreversible. Incluso, el CFP, minado por la escisión del roldosismo, parecía ir camino al agotamiento después de haber alcanzado su cénit en 1979. Ya en las

elecciones municipales siguientes su fuerza bajó considerablemente.

Al mismo tiempo, el régimen Roldós-Hurtado, intentaba desde el gobierno, crear las bases para la formación de partidos "modernos de masas". Así, demócrata-cristianos, social-demócratas, socialistas y otros grupos inician los primeros esfuerzos por constituir aparatos partidarios disciplinados, orgánicos y de tipo ideológico-programático. Los avances de su conformación se asocian a un esfuerzo por captar y movilizar la voluntad colectiva de grupos marginados y periféricos al anterior sistema político; sectores que debido a su reciente conformación o a su no participación secular en la vida cívica (i.e. analfabetos, indígenas, etnias, pobladores, mujeres, etc.), eran vistos como una masa "disponible" a la espera de un agente político que las articulara y estructurara su participación en la vida pública nacional. Se desata, pues, una verdadera carrera por agregar estos intereses virtuales y por hacerlo de una forma alternativista con respecto a los estilos tradicionales. Es interesante notar, sin embargo, que la presión del "centro-izquierda" sobre los partidos históricos y las facciones caudillistas lleva a que algunos de estos últimos esbocen intentos de ponerse al día, a su manera, en el campo de la política moderna de masas. Estos esfuerzos coexisten y se superponen con los intentos de potenciar los estilos

cacicales y corporatistas consuetudinarios.

Sin embargo, debe anotarse un hecho crucial: los sectores empresariales, en general, salvo algunos grupos dependientes de las políticas protectoras del Estado siguen manteniendo el mismo enfoque corporativo, centrado en las Cámaras y en el clásico estilo patrimonialista de hacer política. En cierta forma se reproduce hacia el nuevo gobierno civil el mismo rechazo que sintieron, en su debida ocasión, hacia la conducción militar.

El gobierno de centro-izquierda buscaba una "modernización" de la política, haciéndose, en eso al menos, heredero de los militares, una "modernización" perfectamente enmarcada dentro de moldes valóricos burgueses ... pero sin los burgueses. Se da pues la situación de que el modo burgués de hacer política debe ser impuesto a los burgueses por grupos dirigentes no burgueses, que los empresarios no reconocen como agentes válidos. El sector privado se aferra persistentemente a su propuesta corporatista, patrimonialista y cacical; aún mientras prosigue y profundiza su desarrollo como clase económica capitalista crecientemente cosmopolita y transnacionalizada. Se prefigura la imagen de un empresario que acumula, consume y trabaja en el horizonte de Miami, y hace política, vida familiar e interacción social y laboral en el horizonte hacendario tradicional, o sea que se perfila como un "condottiero" armado de computadoras y que aplica las

más modernas técnicas financieras. Este sincretismo ético va a tener un más pleno despliegue en la formulación del programa y la práctica política del Frente de Reconstrucción Nacional.

IV. LAS ELECCIONES DE 1984 Y EL FRENTE DE RECONSTRUCCION NACIONAL

Al acercarse las elecciones presidenciales de 1984 se fue haciendo progresivamente claro que no podía esperarse una mera repetición de las tendencias observadas hasta entonces.

En primer lugar, la coyuntura económica se presentaba desfavorable para la continuidad del régimen. La baja de los precios del petróleo, y la crisis de la balanza de pagos que este hecho provocaba, obligan al gobierno de Hurtado a una política de austeridad que abre la puerta a una crítica que parte de su base social de apoyo y que es febrilmente retomada y amplificada por la oposición empresarial. Las políticas de austeridad de Hurtado, que "típicamente" corresponderían a una racionalidad pro-empresarial, encuentran en este segmento de la sociedad una oposición tan violenta como la que se esboza en los sectores asalariados y dependientes del Estado. Asimismo, esto provoca que la adhesión al régimen de muchas capas recién accedidas a la vida política se vean disminuidas, abriéndose la oportunidad para que la forma de hacer política tradicional adquiriera nuevas fuerzas. En efecto, en circunstancias en que ni el mercado, ni el Estado pueden amparar a la masa social, la credibilidad de estas formas "modernas" de asignación de recursos queda cuestionada a los ojos de la población. Fácil, es pues, qu se revitalice la tendencia a buscar

refugio en los mecanismos caudillistas y clientelares tradicionales. Esta coyuntura es recuperada por la política empresarial, la cual en torno a estos descontentos estructura un frente político amplio en que hallan cabida toda sus componentes: se trata del Frente de Reconstrucción Nacional. El liderazgo de este frente es rápidamente asumido por el empresario guayaquileño León Febres Cordero quien tenía ya tras de sí una larga carrera como abanderado de la más dura oposición al régimen militar, a la constitución de 1978 y a Roldós y Hurtado.

Febres Cordero es un representante directo de las Cámaras, el hombre que en su vida, persona e ideas representa y quiere representar públicamente la naturaleza misma del empresariado ecuatoriano, y sobre todo de su grupo guayaquileño más transnacionalizado y económicamente dinámico ("moderno" en un sentido estrechamente economicista).

El frente que conforma Febres Cordero integra a los partidos tradicionales: liberal, conservador; a los social-cristianos; y a las facciones caudillistas ligadas a los ex-Presidentes Arosemena Gómez, Arosemena Monroy y Velasco Ibarra. Su primer discurso reúne una serie de elementos heterogéneos que intenta fusionar en un proyecto de gobierno viable.

A. El "neoliberalismo empresarial"

El planteamiento que se expresa aquí arranca de la progresiva permeabilización de los sectores empresariales más vinculados a la economía internacional o la ideología neoliberal y privatista que tiene su foco de difusión en los Estados Unidos.

Este discurso, permite a las Cámaras y a importantes grupos dentro de los partidos liberal y, sobre todo social-cristiano, plantearse la posibilidad de desarrollar su propia versión de la "modernidad" que fuese una respuesta al estatismo universalista del centro-izquierda. Por primera vez, grupos importantes de intelectuales, políticos y empresarios "burgueses" se sienten poseedores de un mito movilizador propio, nacido y sustentado sobre la pura base de las relaciones mercantiles. Este discurso se presenta como el vehículo de una hegemonía directa de clase, que, sin embargo, apela a un universo conceptual e instrumental específico a la práctica y a interés del empresariado como clase económica dentro del circuito de acumulación del capital. El propietario ya no se presenta a la escena política como pretendiente a una autoridad derivada de su rol social patriarcal/cacical. Ya no es necesaria la figura ni la práctica del caudillo, ni la del empresario del "honor" social. El político "burgués" se presenta ahora como portador de una legitimidad basada en las leyes y normas

objetivas e impersonales del mercado y de la actividad económica. Es posible oponer ahora a la figura del tecnócrata "estatista", la del tecnócrata "empresarial".

Esta propuesta representa un intento de hegemonía en términos de una sociedad moderna de clases. Se ofrece como discurso que aspira a moldear el conjunto del consenso social en torno a sus propios valores, y por lo tanto, representa una ruptura no solo con el discurso hegemónico del Estado regulador, sino con la propia cultura política vernácula de la derecha. Es por ello un arma ofensiva de conquista de nuevas bases de legitimidad social, capaz de superar la defensa pasiva del "modo de hacer" familístico, aparentemente desbordado por la política de los nuevos partidos racionalistas del centro-izquierda.

Cabe señalar, sin embargo, la paradoja de que aunque el candidato promueve activamente este nuevo mito de identidad hegemónica del sector empresarial; su "estilo" político cuotidiano, su práctica del poder es casi calcada sobre la de los clásicos caudillos, especialmente sobre la figura de Velasco Ibarra. Trasponiendo a título de analogía, es como si, en Chile, un Gustavo Ross o un Jorge Alessandri hubiesen escogido hablar a través de la voz y figura de un Arturo Alessandri, o de un Eliecer Gaitan. En todo caso, a pesar de esta presencia combinada y paradojal de la simbólica del caudillismo y de la lógica del neo-liberalismo, es cierto que

en la primera racionalidad política del Frente de Reconstrucción Nacional primaba un esfuerzo por crear un antídoto hegemónico al estatismo dominante desde 1972 y hacer por vez primera política clasista nacional, que superase la mera defensa económica-corporativa y que no tuviese que pagar los costos de desacumulación presentes en la práctica cacical.

B. El "catolicismo" empresarial

La matriz católica proporcionó tradicionalmente su cultura política a una parte importante de las clases dominantes del Ecuador. Sin embargo, esta influencia fue acotada y limitada por la influencia del liberalismo secular y de la masonería, sobre todo en la Costa. A partir de los años 50, se produce un fenómeno particular en la relación clases dominante/catolicismo. Se trata de un proceso que tiene muchas analogías con la formación de la burguesía "franquista" en España (y muchas conexiones reales, orgánicas: ver, por ejemplo, el rol de la Universidad de Pamplona en la formación de las juventudes burguesas o aspirantes a serlo de la sierra ecuatoriana). Básicamente, se trata de un movimiento que busca reconciliar el modo de vida empresarial con los valores católicos y crear un hasta entonces ausente "catolicismo de empresarios". El ultramontanismo subyacente a la cultura conservadora de la sierra ecuatoriana, enfatizaba valores altamente funcionales

a la reproducción de la forma de vida patricia. El conservadurismo está marcado por un sentido de "noblesse oblige", de asistencialismo social, de responsabilidad personal hacia los inferiores, y por una crítica acerba hacia el modernismo secular y sus consecuencias en la economía de mercado. La educación conservadora era anti-burguesa e inhibía la formación de un "ethos" económico empresarial, así como la cristalización de autoimágenes privatistas entre las clases poseedoras. El ocupar posiciones sociales elevadas implicaba responsabilidades hacia lo político y lo social y la propiedad no era un derecho natural en el sentido lockiano, sino un "encargo" divinamente sancionado, del cual el beneficiario debía dar cuenta a Dios y a la comunidad. Este complejo ideológico, sin duda no era conducente a permitir una articulación del empresario como sujeto con "buena consciencia", y sin esta última, mal podía pensarse en que el empresario hallase las bases de su identidad social en su condición de clase. La necesidad justificatoria debía satisfacerse viviendo su condición como la del "patrón" inmerso en la reciprocidad social de las relaciones de intercambio honorífico con su entorno. Solo en este terreno podía fundar una autoridad propiamente tal. Pero este último estilo de autoridad era aquel que precisamente era roto por el nuevo Estado, y era el que había que superar para fundar y fundamental una política burguesa liberal con visos de

hegemonía de clase.

A través del período entre 1950-80, se inicia y toma paulatina profundidad este proceso de formulación de una reconciliación entre catolicismo y ethos empresarial, el cual va parejas con el ritmo de penetración de la actividad empresarial entre los sectores dominantes católicos, sobre todo de la sierra (aunque no solo entre ellos). El social-cristianismo representa la vertiente política de esta corriente que paulatinamente transforma al conservadurismo en un fósil provinciano y sin proyecto. El éxito del Opus Dei expresa su faz religioso-cultural. Las dos ideas matrices que aseguran este resoldamiento entre liberalismo económico y rigorismo religioso, están dados por la elaboración que el Opus Dei hace de una forma de religiosidad volcada hacia un elitismo privatista. La justificación es ahora la obra de un refinamiento volcado en la esfera de la familia y de la intimidad. La responsabilidad del empresario es despolitizada; al convertirse a la intimidad hogareña y social inmediata en el espacio social privilegiado; en vez de la sociedad en sentido amplio, el gobierno, el estado, o de las otras clases con quienes ahora sólo se relacionan a través del "ejemplo", del espectáculo de virtud privada que el empresario ofrece a sus ojos.

De esta manera el privatismo queda justificado y el campo de la regulación de la interacción social puede ser ocupado

por el mercado sin la interferencia del aristotelismo tradicional. De este modo, también, se implementa una segunda idea: la de una noción de virtud centrada en un perfeccionismo praxiológico: en el cual el bien moral es función del "bien hacer" aquello que corresponde al estado o condición de cada cual. Virtuoso podrá ser entonces quien sea un buen empresario. La eficiencia adquiere una dimensión moral que permite el fácil entronque con un "ethos" tecnocrático del desempeño. En cierta forma, el Opus Dei puede proporcionar el equivalente funcional del puritanismo en el ámbito de la cultura católica, y de alguna forma permite romper en parte algunas de las barreras culturales que impedían que la burguesía católica de la sierra pudiese cerrar filas en torno a la más desprejuiciada mentalidad mercantil del empresario costeño. Si el "neo-liberalismo" de matriz secular permite articular a la generalidad del empresariado ecuatoriano, el movimiento social-cristiano permeado de Opus-Deismo permite la incorporación de los dos grupos a un mismo frente cultural y en un terreno donde los empresarios serranos podían reunirse con el empresariado secular sin raíces coloniales que prima en Guayaquil. La sierra proporciona pues un partido y una religión, la costa una ideología secular, un líder y una tecnocracia, para así conformar un movimiento relativamente soldado por un sentido mínimo de identidad colectiva en torno a un proyecto de

hegemonía empresarial alternativo al militar/estatista.

Sin embargo, estas tendencias político-culturales no carecen de debilidades y problemas. En primer lugar, la coalición política representada por el "Frente de Reconstrucción Nacional" albergaba también en su seno los elementos remanentes del viejo caudillismo cacical. Estos elementos aunque habían perdido buena parte de su arraigo de masas, aun eran importantes en la conformación mental y atitudinal de las cúpulas socio-políticas del Frente. Sin gran influencia de masas, mantenían una difusa presencia en los círculos y cliques más cerradas donde se hacía la política cuotidiana del Frente. Sus prácticas permeaban e infiltraban a la dirección de la oposición al régimen centro-izquierdistas, y buena parte del personal más veterano y ducho del Frente provenía de los cuadros tradicionales. Estos cuadros coexistían, y en muchos casos encuadraba a los nuevos estratos dirigentes tecno-empresariales o católicos "modernos".

Pero la presencia del patrimonialismo iba más lejos que una simple coexistencia. Se trataba en ocasión de una verdadera amalgama sincrética de actitudes en el seno mismo de la "nueva" dirigencia derechista. La escisión entre modernismo y capitalismo también se daba en la dirección "neo-liberal". Se pudo asistir a la expresión política de este mutuo acomodo de lógica empresarial y lógica tradicional

de una manera que el propio Febres Cordero expresaba en su persona misma. El jefe de la coalición frentista sintetizaba estas determinaciones polares de manera particularmente llamativa: empresario de alto vuelo y de éxito, ejemplo vivo de la "bancocracia" porteña; campeón de la ideología libre-empresarial a ultranza; era en el discurso un eco del liberalismo "reaganiano". Sin embargo, al mismo tiempo y sin solución de continuidad, su práctica política, su semántica gestual y verbal; su vida personal; su estilo de agregación de opinión era la expresión típica del viejo caudillismo. En su persona pública se hallan presentes y exacerbados los rasgos del "jefe" populista patriarcal: la violencia verbal; el personalismo, el uso masivo de formas de acción social centradas en el "habitus" (23) del honor, la disposición a ver el poder como expresión de la "potencia" personal, más que como la instrumentalización de una autoridad legal-racional e impersonal. Aunque invoca los mismos principios que un liberal al estilo Jorge Alessandri, o Sergio de Castro, nada hay en su postura más lejano al racionalismo "objetivo" e impersonal de estos últimos. El referente último de su personaje público sigue siendo la figura del capitán "coronel" (usando la terminología brasileña); del dueño de hombres, del foco de lealtades personales intensas, a la manera de los conductores de "yaguncos" que Guimaraes Rosa retratara con tanta fuerza y nítidos perfiles en

sunovela "Sertao: Veredas".

Este sincretismo al que hacemos referencia, no era expresión sino de un sincretismo más general que definía la esfera de la vida privada y pública del empresariado "moderno" que Febres Cordero representaba (representación tanto en el sentido instrumental, como en el "expresivo"). El desarrollo de los elementos neo-liberales y opus-deistas puede verse a esta luz en sus limitaciones inherentes. La presencia de estos elementos culturales, no alcanzaba a ser un proceso profundo de "reforma" de las clases dominantes nacionales; eran ideas prácticas y horizontes mentales que no alcanzaban a conformar un "habitus" alternativo; una disposición atitudinal maestra que regulara el conjunto de la vida del sujeto. Más bien son elementos de una "mala consciencia" grupal: actitudes y pensamientos sinceramente creídos, pero falsos en tanto determinante últimos de la conducta del sujeto (24). Las "bases" burguesas ecuatorianas querían creerse liberales y católicas-modernas; pero más allá de esta voluntad, su "última ratio" subjetiva seguía siendo familística y patrimonial. La práctica y el discurso capitalistas son funcionalizados como medio de la preservación y consolidación de este poder y estas formas de deseo más ancestrales.

Hay varios síntomas de ello: con todo el desarrollo "moderno" del sistema financiero y de gestión empresarial, en

Ecuador la Sociedad Anónima encuentra un desarrollo muy débil. Los propios empresarios, responden a la propuesta de transar sin valores en el mercado anónimo (bolsa), con reticencia. En palabras de alguno: "no me gusta la idea de entregar control sobre parte de mi propiedad a extraños, o a gente ajena a la familia". En esta frase se resume todo. La empresa privada se entiende y vive como forma de consolidar y extender el poder social y el horizonte de una familia. La empresa privada ecuatoriana es un negocio para sostener la preservación de las redes familiares ampliadas de reciprocidad. En este sentido puede re-interpretarse las nada weberianas prácticas de consumo suntuario y "derroche" de la burguesía local: este "derroche", esta suntuosidad del consumo, no es la realización hedonística de un goce privado que desplaza al ahorro en aras de alguna congénita incapacidad de posponer la gratificación: una especie de tropical falta de disciplina. El consumo suntuario de las clases altas ecuatorianas es una bien calculada manera de ganar prestigio, de invertir en obtener aliados, en expandir el radio de acción de la familia y en cimentar su unidad y sus alianzas. Son lo que los diplomáticos llaman "gastos de representación".

Existe una estrategia de inversión social, tan sofisticada y racional como aquella destinada a ganar dinero, y que, -y esto es lo importante-, subordina y sobredetermina

a la segunda. Para una familia ecuatoriana el consumo suntuario social es una condición sine qua-non de su reproducción ampliada como mecanismo de dominación y de integración social. Esto mismo nos reconduce a entender que el ethos político liberal, con todo su "furia y estruendo" no posee una capacidad autónoma para hegemonizar y movilizar la subjetividad de las elites ecuatorianas, por mucho que estas lo adopten, proclamen y formalmente, al menos, lo practiquen.

Así como el catolicismo fue adoptado y luego desvirtuado por la religión natural de los habitantes autóctonos del antiguo incario. El "ethos" empresarial es proclamado, adoptado, reverenciado y practicado incluso; pero detrás de su rostro impersonal habla todavía y pulula el modo de ser secular de sus sujetos.

Lo anterior apunta -entonces-, al hecho de que la heteronomía del universo social del Frente de Reconstrucción Nacional, no se basaba tan solo en la supervivencia de grupos cacicales "derechistas" en su seno, sino que también, a que dentro de sus grupos más avanzados, la afirmación de un sentido de universalismo -racional, capitalista- distaba de constituir un elemento estructurante incuestionado, y en la esfera política era funcionalizada como nueva forma de eficacia de lo familístico.

En un primer momento, esta componente revistió un carácter más soterrado, pero la estrategia política estaría

llamada a darle un peso creciente al punto de llevar a una contradicción violenta y cada vez más antinómica con el sedicente proyecto de modernización capitalista que parecía definir al proyecto de gobierno del Frente.

V. EL POPULISMO Y EL CENTRO IZQUIERDA

En 1979, los partidos tradicionales habían sido derrotados por el CFP en alianza con la democracia popular (democracia cristiana); y por la izquierda cristiana (social democracia). Ya hemos señalado el carácter genérico de la convocatoria del centro-izquierda en tanto heredero de aquellos intereses "cultivados" por los militares en torno a la modernización y burocratización del estado y de la vida pública, y en torno a la desprivatización del poder. El rol del populismo representado en la FRA (Frente Radical Alfarista) y en el CFP es muy distinto. El tipo de caudillismo que el CFP representa aparece con un sentido propio y con un lugar que impide asimilarlo al estilo "patricio" tradicional.

En efecto, no por nada el CFP y la derecha mantuvieron por décadas una cerrada disputa, que incluso, en su posterior reconciliación a partir de 1980, nunca llevó a una asimilación sin más ni más de la Concentración al espacio político de los partidos burgueses.

El CFP ha sido un objeto de intenso debate y en torno a él se han tejido contradictorias versiones (25). En todo caso, sin entrar a profundizar en dicho debate, parece plausible reconstruir su racionalidad política de la siguiente manera:

Un primer dato que es preciso tener en cuenta es que el CFP funciona al estilo "tradicional". Sus redes de lealtad, sus objetivos, un análisis de su discurso y su acción concreta revela un énfasis extremo en las formas cacicales y en la redistribución de excedentes por la vía del favor y los dones recíprocos. Es pues una maquinaria social, en donde el cliente se constituye como sujeto sociológico tanto como, y antes que, como sujeto político. El CFP es un disolvente de las pertenencias e identificaciones de clase. Sobre la convocatoria de la idea de clase establece la convocatoria en base al concepto de "pueblo", entendido éste como forma cultural, forma de vida opuesta con la de quienes están fuera del intercambio simbólico con el pueblo. Se trata de una noción de "pueblo" diferente a la marxista, pues en ella pueden incluirse los capitalistas y los funcionarios públicos. La condición de su pertenencia está en su disponibilidad para intercambiar con el "pueblo", para hacerse cómplice con éste en mecanismos de coordinación extra-mercantiles. Los caudillos del CFP operan pues como grandes "coroneles" de base urbana, y al interior del ámbito urbano trasponen y reproducen las formas de socialidad, integración y control social campesinos.

Sin embargo,los caciques cefepistas, con Assad Bucaaram a su cabeza no son miembros "bona fide" de la elite tradicional (a diferencia de Velasco, Guevara Moreno o los Arosemena, por

ejemplo). Hay entre ellos profesionales, empresarios, burócratas, pero frente a su clientela no operan como tales; sino que como "conectores" de la demanda tradicionalista de un "pueblo" desproletarizado con los recursos económicos e institucionales a que tienen acceso. Al mismo tiempo, estos agentes, son en gran medida periféricos al núcleo social de la elite. Empresarios medianos con aspiraciones pero todavía envueltos en el fragor de la batalla "por llegar arriba"; inversionistas inseguros frente al mercado y necesitados de puntales políticos para dar alas o amparo a sus negocios, capitalistas "nuevos" apenas salidos de la etapa "corsaria" de la acumulación originaria; terratenientes marginales, especuladores, profesionales que se abren paso, mandos medios burocráticos en busca de patronos que agilicen su promoción organizacional; cazadores de puestos ("lumpen" burocracia); cuadros de origen universitario en busca de qué encuadrar; toda suerte de intermediarios, lazarillos y los ubicuos pequeños comerciantes y trabajadores por "cuenta propia".

El común denominador de estos elementos es doble: por un lado su carácter de periféricos de cada clase o circuito de integración social pre-constituído, y en segundo lugar su carácter de máquina por medio de la cual lo político re-constituye una unidad social de auto-identificación sustituto de la comunidad tradicional campesina, al margen del discurso de clase, etnia o cultura.

A estos se suman otros factores: el CFP se presenta como un partido del "pueblo" de Guayaquil contra el centralismo serrano, como aquel punto donde la sociedad plebeya porteña se identifica por oposición y antinomia con Quito, y por extensión contra el Estado que Quito representa. Porque la lucha no es solo contra la peculiaridad sociológica regional andina, sino contra el universalismo que la recubre, como fruto de su función adicional de centro del poder nacional, y de crisol formativo de los aparatos e intelectuales de Estado, los cuales con su acción centrípeta, homogeneizadora, "versallesca", amenazan de continuo con socavar la autonomía y las identidades sociales trabajosa y precariamente mantenidas, en un universo popular como el guayaquileño, tan carente de mitos y referentes ancestrales de vida colectiva, y continuamente desestabilizado por el carácter aluvional de su constitución como urbe y como esfera de socialidad compartida.

La imagen del caudillo supremo Bucaaram y sus hijos; expresa también esta precariedad: hijo de libaneses, tal vez el mismo nacido en Líbano, talvez no. Hijo del barco y de una raza transhumante, que se mitifica como equivalente simbólico de lo nomádico, la mercurial, lo fenicio; lo sin raíces; el arquetípico buhonero (que lo fue en su juventud); con un nombre no cristiano, el meteco por excelencia; de precaria cultura, casi intocado por los aparatos

educacionales del Estado; levantado sobre su propio esfuerzo y sus recursos individuales, sin conexión, ni influencia; Bucaaram no solo es visto por sus seguidores, sino por los propios agentes del Estado nacional, como la presencia de lo anti-nacional, de lo anti-estatal. Su posible elección a la Presidencia es vista como una amenaza a la integridad del Estado, como la antesala del caos y la desintegración, porque con el irrumpe en el poder esa calle, de trafago y de puerto, de dudosa procedencia y aventurado destino, hecha de la amalgama puramente agregativa de lo plural, más que de la unidad arquitectónicamente construida sobre profundos cimientos de historia que el mito de lo estatal-nacional invoca.

Por ello mismo, el proyecto político (valga la licencia teleológica), del CFP representa el punto extremo de una forma de hacer política desprovista e incluso opuesta a un referente estatal asumido como positividad. Esto es, el CFP puede detener el avance de la estatización; disolver el poder del Estado, jaquearlo y desviar los recursos de éste para su propio beneficio, pero no puede gobernar, o sea asumir el Estado, hacerse cargo de él y convertirse en aparato de hegemonía política. Simplemente el CFP no está hecho para ello, ni le interesa. Su presencia dentro del Estado será más la de una quinta columna disolvente que la de un participante "bona fide".

A diferencia de los partidos tradicionales, sin embargo, el CFP no ancla el mundo de lo popular en las sólidas raíces de lo patricio. Puede verse al CFP como un cacicalismo plebeyo dejado a sus propios arbitrios, sin la "moderación" que el encuadre burgués y/o patricio imponía a los populismos de más antigua data. Mientras el viejo cacique, asentaba su dominio en el prestigio ancestral y familiar, en su superioridad de clase, y cimentaba de alguna manera lo público, asimilado, es cierto, a lo privado del notable; en el caso del CFP ese referente "estabilizador" desaparece. El "pueblo" ya no queda avasallado por los grandes nombres o las viejas fortunas; lo público ya no tiene la precaria máscara, pero máscara al fin del interés familístico patricio; ahora todo es el avatar y la actividad del "self-made man", del agente tan plebeyo como cualquiera, cuyo único anclaje en la biografía colectiva es el fruto contemporáneo y siempre precario de sus propios manejos y transacciones. El CFP es pues el "hinterland" tradicional del cual el hacendado se ha ausentado con todo su cortejo y su servidumbre.

Este populismo cefepista (y en menor medida el del FRA, donde sin embargo el rol de los "notables" patricios es mucho mayor, lo cual lo acerca mucho más al caciquismo tradicional), no puede ser pues "reducido" por el Estado y sus agentes; ni por el estatismo y los suyos. Prueba de ello es que electoralmente su fuerza geográfica es simétricamente

inversa al de democratacristianos y socialdemócratas. Sin embargo, tampoco puede ser re-satelizado por el patriciado y sus máquinas políticas. Puede hacer alianzas con estos últimos, pero mal puede ir más allá de un incómodo "pacto de ladrones" basado en las formas más primarias de la conveniencia inmediata (prudencial).

Esta irreductibilidad debe entenderse, en parte, al menos como resultado de la incapacidad cuantitativa de la empresa privada por financiar el enorme mercado de favores y dones que implica "sumar al CFP". Ya Velasco Ibarra había topado contra esta ingobernabilidad de la demanda "popular" del puerto y de la costa. Su dimensión y variedad devienen tan grandes, que la capacidad fiscal de organizar un reparto prebendario y redistributivo directo, como lo requiere la base cefepista; es rápidamente desbordada. Y, en efecto, el cefepismo surge en los intersticios que dejan las limitaciones objetivas de las máquinas liberales, y luego del velasquismo para satisfacer las necesidades sociales de una clientela que ya no tiene nada en común con aquellas de otrora: provincianas, reducidas, aisladas y de hábitos de consumo altamente autosuficientes y "costumbristas". El cefepismo recoge y potencia estas necesidades cuotidianas enormemente ampliadas por la gigantesca aglomeración de personas que convergen sobre la urbe costeña; pero al hacerlo lo hacen con la misma lógica y las mismas máximas que

proporcionaban un marco suficiente de funcionamiento a la política prebendaria del pequeño pueblo. Hay pues una metropolización de los mecanismos de formación de necesidades y de canalización de expectativas. El CFP entra en crisis al gobernar no solo porque no tiene proyecto ni formas de acción estatales y nacionales, sino porque no puede satisfacer las necesidades que crea y que constituye a través de sus redes clientelares.

Con este marco de análisis, podemos entender lo ocurrido bajo Roldós, a partir de 1980. Apenas asumido el mando por la coalición CFP-DC, el partido y el bloque parlamentario cefepista pasarán a la oposición contra su gobierno y su presidente. La labor de gobernar, fue, durante los años siguientes, la obra de los demócratacristianos, y de aquel muñón del CFP que Roldós pudo arrastrar consigo, desgajando a los grupos más "intelectuales" y "estatistas" de la agrupación. En el roldosismo se produce un sincretismo entre los caudillos que siguen a Roldós en tanto caudillo alternativo a Bucaaram, y los "técnicos" y "profesionales" emergidos de la matriz populista, pero que a través de la burocratización de los años anteriores habían podido gravitar hacia posiciones más "modernas". El roldosismo aparece entonces como una realidad diferente, donde de alguna manera se produce esta inédita colusión entre los caudillos de relevo del CFP (Abdalá Bucaaram, Roberto Dunn, etc.) y una

serie de cuadros político-profesionales que se ubican en una perspectiva más estatal-hegemónica. Por ello también el populismo de Abdala, aunque recoge y lleva a su apoteosis el "folklorismo" del CFP, al mismo tiempo, esboza en sus márgenes el perfil de una política ideológica y de una práctica "modernizante" del manejo público. El roldosismo llega a 1984 con esta íntima ambivalencia, la cual bajo la presión conjunta de sus competidores; presidencialismo caudillista (Febres Cordero), alfarismo (FRA) y cefepismo (ahora bajo Angel Duarte y Averroes Bucaram), al mismo tiempo que ahonda su atracción electoral (ver el aplastante triunfo conseguido en las elecciones parlamentarias de 1986 en Guayaquil); también tiende a imprimirle un énfasis más "tradicional" y más "populachero".

En todo caso, el elemento político-cultural dominante durante las administraciones Roldós-Hurtado fue netamente anti-populista; aunque no antipopular. Al contrario, la democracia cristiana ecuatoriana desarrolló y trató de llevar a la práctica una versión muy peculiar del estatismo, una versión que podríamos llamar de "estatismo popular", a diferencia de las formas más abstractas y formales que este reviste en el discurso de la izquierda democrática (26).

El período de 1980-84 presencia, pues, el rompimiento de la alianza de centro-izquierda entre el cefepismo, por un lado, y las facciones roldosistas y del centro-izquierda

"modernizante" por otro. Los imperativos de la táctica política pronto estimularían el desarrollo de una alianza relativamente estrecha entre los partidos tradicionales y el CFP.

El análisis de los dos grandes partidos de la "modernización": la Izquierda Democrática y la Democracia Popular (pertenecientes a la internacional social-demócrata y a la demócrata-cristiana respectivamente), resulta necesario para redondear esta revisión de los grandes contendores que se presentan a las elecciones generales de 1984. Un análisis de su discurso (27) y de su práctica política nos lleva a detectar una serie de matices, tanto respecto a su soporte social, como al tipo de cultura política que ellos representan.

Lo primero que llama la atención respecto al segundo de estos puntos, es la relativa parquedad de la ID con respecto a los temas "clasistas" o movilizacionales. Su discurso no se presenta como un discurso de una contra-movilización anti-estatal de las clases subordinadas o marginales; ni tampoco como un discurso de movilización alternativa sobre y hacia el Estado; que pretenda darle a éste un contenido más democrático o más "popular".

En este sentido la ID se presenta como el defensor y el garante por excelencia del marco institucional heredado de la transición hacia la democracia formal a fines de la década

del setenta.

Esta posición de soporte de la Constitución y del estilo político que esta presupone y define (estatismo democrático-formal y modernizante), permite ver en la ID el mejor heredero civil del proyecto militar de 1972, y su continuador lógico. Prueba adicional se halla en otros aspectos: el vaciamiento y expulsión del tema clasista o "popular" y su reemplazo por el "técnico", y el universo discursivo de lo "institucional" y "objetivo", y por el paradigma de la planificación racional como "desideratum" del buen gobierno. Esta ausencia relativa, no deja de ser especialmente llamativa, si se piensa, que en tanto partido que se quiere social demócrata, la historia y el mito colectivo de la IIa. Internacional se asienta en una afirmación de lo proletario y de los valores no capitalistas en política. En la ID ecuatoriana, no existe ni un asomo del "obrerismo" de los social-demócratas de otras naciones, ni del "pueblo" tal como lo construye el populismo.

De lo que sí hay abundante presencia, es de un discurso del Estado. De Estado en el sentido abstracto que también se halla en la ideología militar: el de un Estado que se propone constituirse como el crisol que disuelve los particularismos sociales, y en el cual estos particularismos se reconocen en su identidad, para fundirse en un todo único, sin contradicción, ni alteridad interna. A diferencia de los

militares, los social-demócratas ecuatorianos, sin embargo, depuran el discurso del Estado abstracto de sus residuos místicos y de su sacralidad, tan presente en la oficialidad de las FF.AA. Este Estado, cumple su función regularadora universalizante y centralizadora en tanto encarnación de la razón "pura", de un logos político científico, que se nutre de lo ético de la verdad y de la técnica, más que la de la voluntad y del bien, como en el pensamiento cuartelario.

Este es, pues, un discurso hormotivizante de la modernidad; un discurso que no es el único posible pues halla su opuesto y su límite en el discurso de la "modernización" privatista impulsada por los cuadros técnicos empresariales vinculados al liberalismo y al social-cristianismo. Cabe señalar, sin embargo, que en un país con la formación histórica hispánico-inca del Ecuador, la vertiente absolutista y centralista de la modernidad aparece como más connatural y más autónoma, que una versión centrífuga e individualista que resulta una planta exótica en un país donde el privatismo es aún el refugio del familismo patriarcal, más que la expresión del "homo economicus" al estilo anglo-sajón. De esta forma, la ID puede recoger de manera menos contradictoria y más pujante las necesidades vinculadas a la eclosión de lo moderno, que lo que puede hacerlo un discurso "liberal".

Al "expulsar" lo clasista, la socialdemocracia

ecuatoriana, puede asimismo liberarse del lastre que para una acumulación de fuerzas entre ciertos sectores empresariales "estado-céntricos" podría representar la necesidad de un referente proletario explícito.

La ID pues, puede funcionar como partido que articula las necesidades de todos aquellos que pueden verse amenazados por el privatismo sea bajo su forma "liberal", sea bajo su forma "patricia", y por tanto presentarse como un partido pluriclasista. Este pluraliclasismo no se ejerce, sin embargo, a través de una incorporación explícita de numerosos grupos que negocian en y a través del partido, sus diferentes reivindicaciones, a la manera de un partido como el Demócrata en Estdos Unidos, sino que en tanto grupo político dirigente que neutraliza y disuelve dichos intereses grupales en ciertos grandes comunes denominadores genéricos en el marco del cual se puede proteger la consecución mínima de sus aspiraciones por parte de sus bases civiles multifacéticas.

En la medida que el Estado ecuatoriano hereda las políticas proteccionistas burocráticas y dirigistas del régimen militar, la ID es refugio privilegiado de todo aquel mundo social que depende para su reproducción ampliada de la persistencia de estas políticas de protección, fomento, centralización y promoción, sobre las cuales se erigieron las bases de una economía nacional relativamente autocentrada y "densa".

El caso de la Democracia Popular es diferente. En ella la matriz intelectual católica permite una sensibilidad mucho mayor hacia lo civil y hacia lo estamental, que el universalismo centralista de la ID.

La democracia-cristiana enfrenta el problema de lo civil frente al estado, no dese la atalaya de una negación o escamoteo, sino planteando dese el inicio un proyecto de resolución de los conflictos sociales en una instancia estatal, que, lejos de "disolverlos", los asume y los regula, sin suprimirlos. A la negación abstracta, muchos más frecuente en la ID, se opone una dialéctica de supresión-conservación. Aquí la palabra clave es "integración".

La política DP es la de activar, des-reprimir, movilizar todas las demandas sociales que han sido marginadas históricamente, no solo por el Estado, sino que también aquellas que no han sido valorizadas por las redes clientelísticas, y que yacen en estado de latencia o potencialidad.

La DP tiene su propio sentido de la modernización, que articula en una política diferente a la de la ID. No es la creación de un espacio mínimo común para los intereses "estadocéntricos", sino en la inducción y activo reclutamiento de los elementos subordinados y marginales a la nación, para articularlos, de manera neo-corporatista, en el seno de un Estado que es universalidad concreta, o sea

racionalidad que incorpora las diferencias y lo diferente como momentos suyos. La DP dirige discursos, programas y políticas explícitas y positivas hacia campesinos, jóvenes, pobladores, grupos étnicos, gremios, pequeños empresarios, y allí donde puede, hacia un empresariado que no ve con buenos ojos este experimento que se le presenta como competitivo con su propio patrimonialismo tradicional.

El proyecto DP, es pues un proyecto de hegemonía moderno, pero donde lo societal adquiere un peso más marcado en contraste con el institucionalismo racional-legal de la ID y con lo individualista del liberalismo neo-empresarial.

En su gobierno, la DP aplicó hasta donde le fue posible esta política, la cual le ha creado una base social no desdeñable y la posibilidad de un crecimiento electoral sólido.

C. La Izquierda Marxista

Los partidos de confesión marxista habían tenido un período de presencia política significativa entre 1920-48, a través del socialismo y en menos grado del comunismo. A pesar de ello, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial su peso político no había dejado de disminuir salvo en algunos "ghettos" sociales y culturales: universidades, sindicatos y magisterio. A partir de 1980, sin embargo, se produce un doble proceso de consolidación orgánica de tipo "frentista" y de crecimiento electoral sostenido, que los

lleva a adquirir bancadas parlamentarias cada vez más nutridas, hasta representar hoy en día cerca del 20% de los curules y más de un 19% del electorado nacional.

En este período surjen tres grandes coaliciones electorales de grupo de izquierda: el FADI-UDP, (Frente Amplio de Izquierda), el MPD (Movimiento Popular Democrático) y el Partido Socialista.

Cada uno de estos movimientos representa un estilo y una variante política sui-generis. El FADI tiene como polo hegemónico al Partido Comunista de tendencia pro-moscovita. El MPD al comunismo "maoista", el PS agrupa a una serie de grupos que en uno y otro momento han sido disidencias de los otros dos, o que provienen de raíces históricas incompatibles con las "Iglesias" que estos representan.

La evolución electoral y política de unos y otros ha sido también objeto de muy distintos avatares.

El FADI, en general, ha tendido a concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de una base obrera, de acuerdo con una visión ortodoxa respecto al rol revolucionario del proletariado urbano-fabril. Su discurso y su práctica han puesto el acento en el "obrerismo" y en el carácter pro-socialista de su lucha. En sus relaciones hacia otros grupos subordinados, su actitud ha sido la de asimilar sus luchas y necesidades a las de la clase obrera. La "proletarización" no solo describe un putativo proceso histórico ineluctable y

de largo plazo, sino que también un imperativo ético que conmina a los aliados a adquirir un modo de vivir y pensar proletario, situación, que por lo demás, sería catalizada y acelerada, por la evolución "natural" del capitalismo. Por lo tanto, la posición política del FADI revela un sectarismo obrerista, que lo "enghetta" a priori. Puede verse como la articulación de un maximalismo de clase que niega el valor y trascendencia de todo lo no obrero, y por lo tanto difícilmente puede convertirse en un vehículo de acumulación de fuerzas civiles extra-obreras.

Por otra parte, y esto es llamativo, el discurso del FADI no se dirige a la clase obrera como portadoras de un proyecto de Estado. Más bien, la convoca a una resistencia contra el Estado, hacia el cual no cabe sino la más extrema suspicacia. El Estado para el FADI es un enemigo, en tanto organización de hegemonía. El reverso de esta medalla, es que si bien la cultura política del FADI es anti-hegemónica y en términos prácticos anarquizante; recupera la noción y práctica del orden incorporando a su vida la noción tradicional de "pueblo". Lo sorprendente es que el sectarismo social y el sectarismo político se fusionan con una reaparición de la práctica cuotidiana de las formas más tradicionales del clientelismo. Reaparece aquí un fenómeno que ya habíamos señalado con respecto al empresariado nacional. La práctica económica "moderna" y capitalista sirve de coartada para la

reproducción ampliada de una forma de vida "patricia". Aquí, el empleo obrero y las relaciones salariales sirven de mecanismo para la reafirmación y supervivencia de formas de vida social y comunitaria tradicionales, y sus formas de reciprocidad. Nada tiene de sorprendente, pues, que el discurso vanguardista-proletario devenga al fin de cuentas en el medio a través del cual las organizaciones de asalariados acceden al amparo de focos de clientelismo alternativos. Viene poco al caso que el nuevo "cacique" sea rojo y proclame la revolución, mientras el antiguo, allá en la hacienda era blanco y hablaba de la propiedad. Para el asalariado no hace mucha diferencia invocar a Dios o invocar a Lenin, siempre y cuando con ello pueda aplacar y contentar a su "padrino" ante el mundo del poder religioso o secular. La lealtad al partido será tal mientras sus dirigentes puedan garantizar a sus bases los buenos oficios ante la cuotidianeidad del poder. El paso de la genuflexión ante la cruz al saludo frente a la hoz y el martillo no revisten para el campesino que trabaja en una fábrica, -a fin de poder sostener su modo de vida campesina-; el carácter de grave quiebre radical que semejante cambio de Iglesia podría provocar a un criollo nutrido del espíritu europeo de religiosidad militante. Si ya hubo que adorar a Cristo para poder seguir adorando a la Pachamama; no hay ningún problema en invocar nuevas deidades europeas para revitalizar el lazo secular con la sangre y la

tierra. El sincretismo andino envuelve y asimila sin rupturas el credo proletario a fin de asegurarse las propicias mediaciones de sus portadores institucionales y una refundación cuotidiana de nuevos cacicagos, si es necesario a pesar de los propios caciques.

La situación de los cuadros ortodoxos, por lo demás es simétrica a la de los hacendados de otrora. Si desean "hacer partido" deben allanarse a compartir y acatar las formas de solidaridad que sus bases defienden como suyas. Esto incluye el caciquismo. Negarse en aras del purismo doctrinario, los condena al aislamiento y a la ineficacia política. Deben, pues, recortar su práctica, quiéranlo o no a las formas de la micropolítica andina tradicional, y producir así el doble discurso de un revolucionarismo trascendentalista y sectario en nombre de un obrerismo, que para ser viable los conmina a una forma de hacer política que teje con el mundo campesino toda suerte de implícitas connivencias que derivan en una nueva inserción del discurso "clasista" en la matriz "profana" de lo "popular". En la medida que el FADI se deja moldear por estos límites a su política, debe ser al mismo tiempo un partido maximalista, obrerista y "tradicional" (en el mismo sentido que el CFP), anti-estatista y ahegemónico.

El caso del MPD es diferente. En esta agrupación, se intenta explícitamente una reconciliación con los dos

elementos que constituyen la consciencia "falsa" del FADI. Por un lado se intenta trascender el obrerismo, avanzando hacia una definición de su base social mucho más ecuménica y heterodoxa. La demanda campesina, poblacional, regionalista, artesanal, de los pequeños funcionarios intelectuales se perfila con "justo derecho" y ya no solo como pre-figuración de la demanda obrera, o como recurso táctico de ésta. En este sentido el MPD puede representarse como un marxismo que se "populariza" saliendo del "ghetto" obrerista. Pero, junto con intentar saldar cuentas con el carácter real de las clases subordinadas ecuatorianas, el MPD insinúa una posición frente al Estado que deja de lado el anti-estatismo del FADI. Se esbozan los principios de una plataforma de gobernabilidad que asume y hace suya la figura de lo "nacional", y que intenta presentarse como portador de proyectos, que al menos sectorialmente, pueden ser vistos como universalistas, o sea como una proposición a la sociedad como un todo, en nombre de ésta, más que en nombre de tal o cual sector de "vanguardia".

Se debe reconocer, que en este aspecto el MPD ha desarrollado su línea mucho menos. En cierta forma manifiesta las características de un "roldosismo" marxista; con intentos de racionalización universalista (en la clave de su propio marco doctrinario), en medio de una fuerte tentación populista que va implícito en su afán de romper el "enghettamiento" obrerista y fortalecerse como un ecumenismo

de los desposeídos, sin "clase" rectora. En esta ambiguedad se balancea el MPD, siendo el partido de izquierda que más ganancias ha logrado en la sociedad civil, y el que más se ha comprometido con las multiformes caras de lo "popular".

Hasta 1985, el Partido Socialista representaba más nítidamente que ninguno, el "purismo" de la intelectualidad marxista. La debilidad de su base obrera y "popular" era la contrapartida de la negativa de sus cuadros a transar en otra cosa que no fuera el "buen hacer" leninista.

Sin duda, hay en esto una huella del hecho de que el socialismo hubiese constituido históricamente -entre otras cosas- como polo aglutinante de los grupos que el comunismo marginaba por exclusión, impermeabilidad o escisión. La crítica hacia el obrerismo, el sindicalismo, y los compromisos con la IIIa. Internacional, y luego con la política soviética, llevaron a los cuadros del socialismo, a marginarse de las precarias, pero reales bases populares que se cobijaban en la estructura que, andando el tiempo, hallarían expresión político-doctoral en el FADI. El rechazo a las tentaciones del populismo las marginó de la posibilidad de hallar otras bases alternativas, y su sectarismo cultural las impidió empalmar con las corrientes cristianas y laicas del estatismo modernizante. Así, la deriva histórica del socialismo se expresó en una pérdida progresiva de sus asideros sociales originales: obreros, artesanos y pequeño-

burgueses, los cuales, o fueron acaudillados por el comunismo, o bien confluyeron hacia el populismo y el maoismo.

En el socialismo ecuatoriano, hay pues un proceso de aislamiento creciente, de purismo ideológico, y de búsqueda de propuestas nacionales que no logran encontrar un referente social que las haga suyas, y que hallen sentidos colectivamente asumidos que nutran una acción política relevante. El socialismo busca evitar los compromisos de la modernidad marxista con el mundo real de los grupos subordinados, pero a costa de ser incapaz de elaborar un lenguaje que sea capaz de reconstituirlos como actores políticos dueños de una identidad nueva y con vocación hegemónica.

El crecimiento electoral socialistta de 1986, no debe entenderse como el resultado del esperado "encuentro" entre discurso y pueblo, en el sentido de que las condiciones de la coyuntura política habrían permitido, al fin, que la retórica socialista haga sentido para un electorado popular que despierta al posible futuro alternativo que este discurso le ofrecería. Más bien debe verse como el dividendo obtenido del abandono del "purismo" en favor de una política "realista" de utilizar a notables locales como abanderados electorales del partido. El PS comienza a captar y utilizar a personajes provinciales, quienes aportan al partido la

fuerza de su poder de convocatoria familística y cacical. En este caso vemos una búsqueda de desbloqueo político pormedio del recurso a las prácticas consuetudinarias de la política ecuatoriana, usando para ella la variante "patricia" del tradicionalismo.

VI. LA COYUNTURA ELECTORAL DE 1984

Las circunstancias políticas del período 1982-1984 le proporcionan a la derecha política, agrupada ahora en el Frente de Reconstrucción Nacional (que incluye a conservadores, liberales, social-cristianos velasquistas, cid, nacionalistas revolucionarios y al APRE), la oportunidad de recuperar la iniciativa política y buscar recuperar el poder perdido en 1972. Para ello contaban con varios factores contextuales que podían ser volcados a su favor.

1. La crisis económica provocada por la caída de los precios del petróleo, con la consiguiente reducción de los ingresos fiscales, y los inicios de una fuerte lucha por el control de las decisiones referentes a la forma de repartir los costos de los consiguientes e ineludibles ajustes.

2. El inicio de una crisis adicional provocada por las altas tasas de interés en los mercados financieros internacionales, lo cual agravaba más aun la situación fiscal, con impactos significativos sobre los programas de desarrollo, redistribución y fomento de la actividad económica de los sectores más dependientes de la demanda controlada por el sector público.

3. El desgaste de los planes y programas del gobierno como fruto de la dura oposición parlamentaria de la derecha, en alianza frecuente con el CFP y el FRA.

4. Las propias tendencias del desarrollo económico

contribuían a unificar la dirección de la economía privada nacional fuera de los circuitos desarrollados por el Estado y sus industrias protegidas. Los primeros años de la década presencian una aceleración de un proceso que, por un lado, privilegia el crecimiento de los grupos económicos privados centrados en torno a la finanza (i.e. Grupo Banco del Pacífico, Filanbanco, COFIEC, etc.).

El interés principal de estos grupos -en tanto representantes del capital social- estriba en lograr romper toda barrera que se oponga al libre flujo de los capitales y de las mercancías tanto dentro de la economía nacional, como entre ésta y el mercado internacional. Para ella, se hacen crecientemente molestas las trabas, regulaciones y el dirigismo propios del modelo militar-estatista, y su pujanza les proporciona medios e influencia cada vez más poderosos para obtener un impacto en el empresariado y en la opinión. Pero su crecientemente no solo es del género descrito. El va aparejado también a la creciente erosión de las barreras sociales, seccionales, regionales y sectoriales que hasta entonces habría segmentado y opuesto entre sí a las clases poseedoras. Cada vez menos puede hablarse de fracciones en un sentido sociológico. La lógica del portafolio y de los centros de acumulación financiera tiende a integrar, cohesionar y poner en formación a intereses dispares hasta entonces, aumentando la comunicación, solidaridad y

homogeneidad espiritual de los empresarios a nivel de todo el país. Esto crea condiciones mejores que nunca para la cristalización de un interés genérico nacional del capital, rompiendo con los seculares particularismos hasta entonces imperantes.

5. La crisis económica revierte a la vida social ecuatoriana a situaciones de escasez relativa que no había conocido desde 1970. La combinación de esto con la cristalización de un interés libre-cambista generalizado tiene el siguiente efecto paradojal: mientras el flujo financiero se racionaliza, centraliza y presiona sobre su entorno para tratar de controlarlo; debe renunciar a convertirse en criterio general de la interacción social. Para poder seguir su propio proceso de concentración y aplicación en lo productivo, debe retirarse de las esferas donde se establecen los lazos de integración social y de acción colectiva. Como el Estado no es capaz, debido a su crisis fiscal, de asumir burocráticamente la tarea de inducir y ampliar la formación de entidades y lealtades colectivas, se produce la posibilidad de que se reactiven prontamente viejos métodos de acción social. El paternalismo cacical, en retirada hasta 1982, y en vías de ser reemplazado sea por esferas crecientes de acción racional-instrumental ligadas a la expansión de la producción industrial y los servicios terciarios, o por esferas crecientes de acción estatista-

burocrática, es reactivado al quebrarse el cascarón de las formas antes mencionadas.

De esta forma, el tejido social presencia un reafirmarse del clientelismo. En efecto, mientras el crecimiento económico permitía ampliar las oportunidades de acumulación, una cierta racionalidad mercantil podía difundirse de la forma ecléctica que hemos postulado en páginas anteriores. Queda en pie el que los lazos de cohesión social entre las clases podían mediarse mercantilmente con cierto éxito en el marco de un producto dinámico y en expansión. Al cerrarse o entorpecerse estos circuitos, las oportunidades de acción orientadas por el lucro debían concentrarse en las cúpulas financiero-empresariales, abriendo el problema de qué hacer a fin de evitar la ruptura de cierta normatividad cohesionante de los distintos grupos e individuos entre sí y con estas élites. Si no se puede repartir excedente, la estrategia de las sociedades sin acumulación es la de repartir favores y servicio personal. En otro tipo de sociedad, no existe una historia colectiva de familismo, por lo cual tal solución no es culturalmente viable. Sólo queda la anomía o la rebeldía de los excluídos de la acumulación. En una sociedad como la ecuatoriana existe y se ha usado el recurso del favor y la deuda personal. Las clases adineradas se vieron impelidas a usar cada vez más de tal recurso para cohesionar al resto, y tal conjunto de actitudes fueron de recurso cada vez más

"natural" también en la esfera de las instituciones estatales o semi-públicas. Se crean así las condiciones para un nuevo auge del populismo junto con y en paralelo con la intensificación de la formación de una racionalidad capitalista genérica y cosmopolita en las cúpulas empresariales y entre su cortejo de servidores profesionales. Esto tiene, sin duda, un impacto en la forma como el Frente de Reconstrucción Nacional ha de abordar el problema de la campaña presidencial de 1984.

Su primera estrategia le era permitida e inducida por el sistema de "ballotage" introducido en la Constitución de 1978. Esto permite hacer experimentos, e intentar correcciones estratégicas o alianzas que minimicen los daños en caso de desastre en la primera vuelta. El planteamiento inicial pudo ser maximalista. El candidato, León Febres Cordero, prefiguraba y anunciaba lo que habría de ser el perfil definitivo de su futuro gobierno. Al mismo tiempo empresario arquetípico, hombre de los bancos, del capital como tal, y caudillo de la vieja escuela, con resabios "velasquistas" y un "ethos" claramente patriarcal/machista.

El manejo de su campaña, tuvo, sin embargo, algunos desfaces y errores de cálculo. Sus publicistas sobreestimaron la posibilidad de crear una candidatura al estilo norteamericano, utilizando recetas del mercado político anglo-sajón. Tal táctica requería la existencia de

un mercado de opinión sensible a los medios modernos de comunicación y a su lenguaje, o que compartiese con los comunicadores los mismos principios de decodificación de los mensajes. La costosa campaña publicitaria del Frente no adoleció de falta de medios, ni de calidad técnico-publicitaria. Sus enemigos políticos, seducidos por las mismas imputaciones que las que informaban a los asesores electorales del Frente, sobreestimaron ellos también el poder de la millonaria campaña montada, y calcularon que la victoria del Frente sería amplia.

El principal contendor de Febres Cordero era el representante de la Izquierda Democrática, Rodrigo Borja, quien a pesar de no haber tenido participación en el régimen saliente, aparecía como el continuador de éste. Su discurso y su campaña tendían a enfatizar y proyectar los mismos contenidos que hemos descrito bajo el apelativo del "estatismo reformista".

El supuesto político implícito que animaba a las candidaturas de los partidos estatistas (Borja de la ID, Trujillo de la Democracia Popular y Huerta del Partido Demócrata), era de que las tendencias de la década anterior se mantendrían, y que el deterioro del populismo se sumaría al de la derecha empresarial para asegurar un nuevo período de regímenes "centro-izquierdistas". Esta posibilidad sólo se vería amagada por el temor a los efectos de la campaña

masiva de opinión pública de los publicistas del Frente de Reconstrucción. En esto -tal como se ha dicho-, los analistas social-demócratas compartían la sobreestimación que sus contendores hacían de la penetración y presencia de un mercado impersonal de la política, y su subestimación de los mecanismos clientelares, particularistas y personalistas de formación de identidades político-electorales.

Por su parte, el CFP, a través de su candidato Angel Duarte, desarrolló una vigorosa campaña dirigida a lo "popular" genérico, la cual echaba mano de figuras, métodos y técnicas de interpelación más propios de la cultura "folklórica", y que apelaba a elementos simbólico-dramáticos de la imaginación popular, más que al registro nacional-iluminista de un electorado putativamente "moderno" (28). Esta apelación que también se halla en las candidaturas seccionales del roldosismo bajo Abdalá Bucaaram, y en las del alfarismo de Cecilia Calderón y Aspiazú Seminario, era visto con sorna condescendiente por los políticos estatistas, pero habría de demostrar una vitalidad enorme sobre todo en la costa y en las barriadas de Guayaquil.

A la izquierda se manifestaban dos candidaturas importantes: la de Jaime Hurtado del MPD y la de René Maugé del FADI. La primera enfatizando cada vez más lo "nacional" en búsqueda de crear una imagen de universalismo trans-clasista, y al mismo tiempo de lo popular no-derivado, lo

cual lleva a esta particular versión del maoismo a realizar su propio reencuentro con el "populismo"; y el segundo, insistiendo en el proyecto clasista-obrerista y marxista ortodoxo que el FADI seguía sosteniendo coherentemente.

Los resultados de la primera vuelta electoral trajeron consigo una serie de sorpresas. En primer lugar el triunfo correspondió al candidato de la ID, Rodrigo Borja, quien obtuvo un apoyo muy superior al esperado; en segundo lugar, el populismo del CFP se situó en el tercer lugar con una fuerte votación que revelaba la persistencia del atractivo de un discurso y una práctica política "cacical" sobre grandes sectores de las masas costeñas. El MPD mostró asimismo un notable crecimiento, que tendió a reforzar la impresión de que la vertiente populista se hallaba en pleno renacimiento. Esta sensación era reforzada más aun por la aplastante victoria roldosistà o en las elecciones locales en el Guayas, bajo una nueva conducción que enfatizaba la lucha por la moralidad, el bien y la justicia planteadas todas estas en términos de cruzada pseudo-religiosa contra el secularismo "corrupto" que hallaba su principal blanco en las clases mercantiles del puerto y en sus máquinas políticas. En cambio, la Democracia Popular -(partido de gobierno)-, sufre una fuerte derrota, atribuíble al desgaste del gobierno y al hecho de que le había tocado manejar el país al estallar la crisis económica de 1982-84. El FADI experimenta un leve

pero continuado crecimiento, y el FRA sufre un retroceso notable frente a sus competidores en la "familia" populista.

Lo interesante, llegados a este punto, es visualizar cómo cada grupo y candidato analizaron los resultados electorales, y las consecuencias que se sacaron en vistas a la segunda vuelta electoral.

A. La izquierda democrática y Rodrigo Borja dieron por ganada la segunda vuelta. ¿Por qué? Los dirigentes y asesores de la campaña de Borja supusieron directamente que los resultados de la segunda vuelta serían el resultado aritmético de la proyección de los de la primera. En otras palabras, no vieron los tres meses de intervalo entre las dos vueltas como un espacio de tiempo dinámico que podía crear y escenificar nuevos hechos o que podía reestructurar las preferencias, actitudes o identidades políticas de los electores. El modelo implícito era de que la segunda vuelta había constituido una expresión de identidades políticas pre-configuradas y relativamente estables, y que en la segunda vuelta, estas identidades políticas no harían sino re-agregarse, esta vez ante dos opciones, en vez de 9 como había ocurrido en la primera vuelta. En otras palabras, no se atribuyó sustancia propia al tiempo, a la estrategia y al juego que podían desarrollar los distintos actores para alterar los términos del debate electoral y las identificaciones del público elector, al cual se suponía

mucho más cristalizado que lo que realmente estaba. Este error se liga con un segundo: se imputó al electorado con una percepción de lo político-electoral diferente a la efectiva. Los estrategas de la ID se tomaron en serio el continuo izquierda-derecha, lineal y "cartesiano" con que los intelectuales y actores racionalistas "leen" la política y las ideologías. Y supusieron similar racionalidad en el elector, lo cual llevaría a que este efectuara un algebra de la transitividad política. De este modo, se calculó que todos los votos a favor de partidos situados del centro a la izquierda del espectro electoral, fluirían automáticamente hacia la ID. No era posible pensar, por ejemplo, que un votante del MPD, fuera a preferir al candidato que <u>más lejos</u> estaba de su propia posición, sobre aquel, que siendo más centrista, tal vez, era claramente más cercano a su propia preferencia. Asimismo, se interpretó al populismo como anti-derechista, y se supuso que una parte mayoritaria de esa votación debía acreditarse a la cuenta de la social-democracia. La ID suponía que la población "calculaba" el espacio ideológico con criterios ideológico-racionales, y no se le pasó por la mente que para grandes sectores del electorado, especialmente en los suburbios, las cosas no se presentaban así, sino que el corte conceptual del mundo podía generar otras divisiones, que rompieran los continuos "cartesianos" a que hemos hecho referencia. Por ejemplo, un

típico criterio "popular", de tipo simbólico-subjetivo, enfatiza la distancia entre lo humano y lo divino; entre lo cercano y lo lejano; entre lo "nuestro" (perteneciente al grupo primario cercano o extenso) vs. lo "ajeno" o "extranjero". Lo "subjetivo" vs. lo "inhumano"; lo conocido y manipulable subjetivamente (la amistad, el honor, la lealtad, la similitud) vs. lo inmanipulable, ignoto (lo normativo, mercantil, abstracto, mediatizado, instrumental-legal), etc. En este mundo así segmentado, un líder como el maoista Hurtado está más cerca de un líder como el cefepista Bucaaram, que de un correligionario marxista (aunque perteneciente a otra "herejía") como René Maugé, y probablemente puede encontrarse en la misma vecindad perceptual con los caciques empresariales, con Febres Cordero, con Aspiazú Seminario, los nuevos roldosistas de Abdalá Bucaaram y los múltiples caciques de base local, sean estos socialistas, social-cristianos o populistas en lo doctrinario.

En la selección de "su" candidato, el votante popular no-estatizado, se acercará a quienes le presenten de manera "escénica", "simbólica" una representación de esta conmensurabilidad y de esta "cercanía" a lo "humano" que equivalga una defensa frente a la aterradora distancia de lo normativo-universalista encarnado en la política secularizada y en sus aparatos normativizados.

La lectura social-demócrata del universo electoral fue, pues víctima de su propio mito autojustificatorio que requería presentar a la política ecuatoriana como el escenario del progreso de la racionalidad moderna, en la cual un partido estatista-secular tomaba todo su significado y era necesario y requerido por una necesidad histórica universal y objetiva. La lectura política de la ID fracasó en definitiva por leerse en el votante, en vez de leer al votante. Haber hecho esto último, por supuesto hubiera generado una crisis interna sobre la capacidad hegemónica y sobre la significación del proyecto social-demócrata en una sociedad como la ecuatoriana, más dramática que geométrica. Y los días que siguen a una victoria electoral no son el mejor momento para auto-inducirse semejantes introspecciones colectivas. Al fin y al cabo, es en esta situación, y en este sentido, que el triunfo es el primer paso hacia la derrota, por obra de la ceguera que promueve en sus beneficiarios.

Como consecuencia de la perspectiva anterior, la ID sobreestimó otro factor: la capacidad de las dirigencias partidarias para controlar los votos de sus respectivos electores. En efecto, pareció suficiente llegar a acuerdos con otros partidos, para así lograr que aquellos quienes habían votado por estos últimos, transfirieran su voto a Borja. La verdad es que, llegado el momento, pudo

constatarse que el control de las cúpulas partidarias sobre su base electoral era más débil de lo pensado. Por un lado, casi siempre las organizaciones partidarias ecuatorianas carecen de los aparatos necesarios para ello y de la capacidad de socializar a su electorado en la disciplina partidaria. En muchos casos el voto no es por el partido, sino por el líder, y encaso de no estar éste en la lucha, el votante se siente liberado de ulterior compromiso con el partido bajo cuya bandera el líder se presenta. La ilusión de la lealtad partidista se vio sin duda reforzada por las leyes electorales que impiden a candidatos independientes presentarse por su propia cuenta. Tal norma buscaba fortalecer los partidos y debilitar a los caudillos personalistas, pero, en la práctica, lo que se creó fue un "mercado" en el cual los partidos pugnaban por conseguir que ciertos líderes cacicales aceptaran presentarse a las elecciones como portaestandartes del partido, sin que esto implicara necesariamente que el líder y sus seguidores se viesen constreñidos a un compromiso orgánico-ideológico más que formal con los partidos. De este modo, muchos candidatos representan, no el fruto de una socialización partidaria nacional, ni son sus campañas expresión de la fuerza organizadora del aparato partidista, sino que el éxito de las cúpulas por "negociar" la suscripción de un líder pre-formado, a la lista partidaria. En otras palabras, el

partido capta líderes, en muchos casos, desarrollados a un nivel extra-partidario por medio de las formas prebendarias-cacicales que hemos descrito a lo largo de este trabajo.

En este punto el malentendido político se desliza en los cálculos de la ID: en la previsión de los resultados de la segunda vuelta. Se sumaron los votos de los partidos ideológicamente más cercanos, y se consideró que otra garantía era proporcionada con los acuerdos con líderes de partidos afines. De este modo, la elección ya estaba ganada en el papel aun antes de haberse iniciado la segunda fase de la campaña. Mientras Febres Cordero se arremangaba la camisa y se sumergía en las barriadas guayaquileñas explotando -ahora sí-, todos los resortes tradicionales de la cultura política costeña -incluído el regionalismo-, Borja se dedicaba a hacer política de estadista, viajando al exterior, entrevistándose con jefes de Estado, sobre todo social-demócratas, asistiendo y afianzando su presencia en los grandes foros y espacios estatales, nacionales e internacionales. Mientras Frebres Cordero buscaba enfatizar una polémica de la <u>cercanía</u> y de lo <u>inmediato</u> ("contacto con el pueblo") y salía a ganar votantes populistas, haciéndose <u>presente</u> con la evidencia de su subjetividad y de su humanidad actual y corpórea, rodeada de todas las formas dramáticas y agonistas del liderazgo heroico; Borja se encerraba en la <u>distancia</u> de los cenáculos impersonales y en

el discurso, necesariamente abstracto e incorpóreo del secularismo racionalista. Entre el caudillo que arenga, y el estadista que planifica y negocia su futuro gobierno se abre una brecha que el sentimiento y las intuiciones políticas populares llenan a favor del candidato del Frente de Reconstrucción.

Finalmente, la ID perdió la oportunidad de establecer una alianza dentro del populismo. Si bien podía ser muy difícil un entendimiento razonable con el CFP o el FRA, el roldosismo seguía siendo un interlocutor asequible. El triunfo de Abdalá Bucaaram para la alcaldía de Guayaquil, lo aseguraba como la gran figura caudillista nueva, y que gozaba de un innegable ascendiente de masas. La ID sin embargo, se abstuvo de buscar un acercamiento con el PRE impulsada por un cúmulo de temores y prejuicios: el temor a la personalidad avasallante de Bucaaram; la incompatibilidad de estilo político entre los dos grupos; la repugnancia a enlodarse con un tipo de política "bárbara" y "folklórica" que rimaba muy mal con la imagen de estadista de Borja y de partido nacional y "serio" que la ID buscaba escenificar, y en último término el peso de lealtades contraídas con un líder roldosista disidente: Aquiles Rigail, enemigo personal de Bucaaram, pero sin ni un asomo de su magnetismo público.

De esta manera, la masa de seguidores roldosistas, potencialmente antagónicos a un populismo "patronal",

quedaron al garete para la elección presidencial, a pesar de que desde el punto de vista de Bucaaram interesaba asegurar una dirigencia nacional desfavorable al CFP y al FRA y a los caciques empresariales, quienes eran los rivales naturales del roldosismo en su espacio político natural de Guayaquil. Por un lado Bucaaram creía poder bastarse a sí mismo y usar a Guayaquil como plataforma para darle al roldosismo una proyección nacional, y por otro Borja pensaba no necesitar de este "bárbaro" populismo para triunfar nacionalmente.

La estrategia y el análisis del Frente de Reconstrucción fue muy difererente y de efectos opuestos a los de la Izquierda Democrática. En primer lugar la dirección del Frente constata la relativa vigencia de su modelo propagandístico basado en el supuesto de la existencia de un público "nacional de masas". Por tanto, en la emergencia, se decide a recurrir a las viejas y consagradas formas del caudillismo. La campaña de medios es reforzada y suplementada en buena medida con la movilización "de barricada" de los candidatos. El Frente se lanza frenéticamente a intentar ganar el suburbio, la barriada, el "guasmo", sobre todo en Guayaquil, apelando a las formas, interacciones y símbolos descritos más arriba. La figura, la "<u>persona</u>" del candidato se desnuda más aun. Febres Cordero es el "hombre que viene de atrás"; el "luchador", el animal político de <u>pasión</u> y <u>coraje</u>. Su campaña se reviste del

dramatismo que la convierte en un caso de interés humano, casi heroico. Su interpelación construye la figura del "león herido" que se rehusa a sucumbir bajo condiciones objetivamente desfavorables. Este drama sensacionalista de la supervivencia y la lucha en condiciones desventajosas, este lenguaje que en sus términos y en sus acentos se reconoce como propio, esta escenificación de la pasión, este agitar de la imagen del macho, del padre que no desprecia ninguna mano y que negocia con todos, cara a cara, de hombre a hombre, y que se plantea como el amigo, el patrón que se conoce y que es parte del pueblo, de la comarca, del barrio, llevan a que el votante popular de la costa, y en menor medida de la sierra, se sientan paulatinamente llamado, requerido de maneras para él plenas de sentido (29). El votante popular empieza a reconocerse y reconocer su propia situación en este candidato "descamisado" y su lucha en desventaja, su deseo de sobrevivir, se ven como si fuesen los propios. Su desprecio a las normas y modales políticos, como el reflejo de su propia anomía frente a la ley y al estado nacional. Febres Cordero ya no se ve como el representante, como el signo de un proyecto de clase impersonal que apunta a estructuras o a sistemas, se ve como este individuo que en su corporeidad es presencia de este hombre, cuyas manos aprietan las del interlocutor y promete honor y reciprocidad: "cumplir", hacer válida una promesa

fundamentada en su persona, en su credibilidad viril, y ya no en la vaguedad incorpórea de un programa o un discurso.

El citado "estilo" político de Febres Cordero tiene como trasfondo e implica una seria redefinición política de la derecha ecuatoriana. Esta redefinición representa en sustancia el abandono de la esperanza de centrar la reconstitución de su hegemonía política en una cultura cívica de tipo liberal-mercantil, y una reversión hacia los mecanismos de la interpelación "populista". Se renuncia a la pretensión de darle un contenido específicamente "burgués" y modernista y se confiesa implícitamente que el problema de la re-creación de un orden político a partir de las formas de sociabilidad empresarial, era, al menos en Ecuador, un problema sin solución. Si entre 1978-1984 el caudillismo es visto como "resabio" en una derecha en proceso de modernización, a partir de 1984, el proyecto modernizante empresarial debe aceptar un rol secundario al de gobernabilidad patricia tradicional, el cual es el precio que debe pagarse para poder ganar la segunda vuelta electoral. En un primer momento, los sectores liberales del Frente pudieron abrigar la esperanza de que el recurso caudillista pudiese no ser mas que un "expediente" que una vez resuelto el impasse electoral, permitiría a los equipos tecnocráticos del capital retomar desde las bambalinas el control del proceso. En esa visión, el populismo de Febres Cordero sería

un "Trompe l'oeil" que no alteraría la sustancia de lo que en efecto se haría desde el gobierno.

Tales esperanzas se verían desmentidas en el período post-electoral. Si bien Febres Cordero logró establecer una alianza implícita (pero cada vez más formal) con el CFP y el FRA, amén de otras bases populistas; esto la obligó a firmar numerosos cheques a fecha, que llegado el momento serían cobrados con implacable ferocidad. Para ganar las elecciones, y, luego, para poder manejar un Congreso donde no tenía mayoría propia, el nuevo presidente debería, a cada paso, entregar un botín indefinidamente creciente a los gestores del caudal electoral cefepista y alfarista. Pero estos, conscientes de su poder de chantaje, harían de cada votación, y de cada tema de política, la ocasión de cobros específicos adicionales que irían obligando al nuevo gobierno a desarmar pieza por pieza la lógica de su política. Al mismo tiempo, esto arrojaría al Presidente y al Frente en medio de la batahola más o menos permanente de la lucha entre caudillos. Si bien estaba decidido que el populismo a ser castigado sería el del irreductible Abdalá Bucaaram, -quien era el más peligroso competidor en ascenso para el CFP y el FRA-, la disputa por el botín entre estos dos partidos, amén de los propios caciques ya incluidos dentro del Frente, forzaría al gobierno a un constante y permanente arbitraje distributivo, en el cual le resultaba extremadamente difícil

lograr la conformidad de todos los querellantes. De este modo, una vez que en 1985 el gobierno logra el control del Congreso por la vía de la compra prebendaria de lealtades opositoras; el momento de su triunfo, es al mismo tiempo el momento de su derrota. El precio de la mayoría parlamentaria será entregar la Presidencia del Congreso el jefe cefepista. Averroes Bucaaram. Pero desde allí, y en ese momento, el populismo generará un problema de ingobernabilidad en el seno de la coalición victoriosa. Una vez controlados los mecanismos formales parlamentarios, el acceso al patronazgo que esto permite, lleva a un descentramiento de la política gubernamental en la querella interminable de los caciques. En otras palabras, el expediente de 1984, se convierte en 1985 en un abrazo paralizante para sus inventores. Para vencer en las elecciones e imponerse al Congreso el nuevo régimen debe recurrir a un instrumento que inmoviliza su propia capacidad de manejar y orientar la política nacional.

Esto tiene como consecuencia además que la política macro-económica del gobierno sufra serios desperfectos. Se hace cada vez más difícil mantener una línea liberal/empresarial frente a la intensa presión redistributivista de los caudillos "plebeyos". De este modo, el sueño de una edición ecuatoriana de un tecnocratismo cosmopolita se disuelve en el maremagnum del pactismo coyuntural.

Esto a su vez desata otros problemas dentro del propio Frente de Reconstrucción Nacional. Por un lado, la necesidad imperiosa de contentar al FRA y al CFP obliga al gobierno a desatender a sus propias clientelas y a los propios caciques políticos del FRN. Esto incrementa los temores dentro de dicho bloque y dentro de los propios partidos integrantes. Ya en 1985 esto lleva a deserciones como la de un sector del partido conservador, una parte de los liberales, y al distanciamiento de caudillos como Carlos Julio Arosemena, que toma una actitud crítica frente al régimen debido a su marginación frente a los "recién" llegados comensales.

Por otra parte, los sectores técnico-empresariales y los grupos más intelectuales y doctrinarios originales de las raíces liberales y social-cristianas del Frente se sienten cada vez más traicionados por el verdadero asalto del poder y de sus prebendas por parte de grupos que son vistos como advenedizos y aventureros sin escrúpulos. Para los grupos más ideológicos y fundamentalistas dentro del régimen, la invasión de las gavillas semi-gangsteriles de "jefes" populistas se presenta como una traición que desarma cualquier perspectiva de hacer "buen" gobierno de acuerdo a sus sueños largamente acariciados.

Por último, la eclosión sorpresivamente fuerte de la política "tradicionalista" y descentrante, en el corazón mismo de un Estado que parecía en vías de eliminar la

hegemonía de dichas prácticas, tiene un efecto devastador sobre las posibilidades de hacer una política de intereses clasistas. En efecto, la política económica/administrativa del régimen hacia el sector empresarial comienza paulatinamente a ser cada vez más una política de "amigos". Se gobierna y se administra no en los prometidos términos del interés y la voluntad generales del empresariado y la propiedad privada, y cada vez más en términos de los intereses particularistas de "cliques" allegadas al personal de gobierno y a la casa presidencial. Febres Cordero ayuda a sus "compadres" empresariales, pero no al capital como tal; la lógica política de la gavilla se hace ahora dominante en el seno mismo de aquella clase que se presentaba y auto-representaba como la portadora de un proyecto universal e impersonal de reforma nacional. El rol fundamental de ciertos grupos cercanos a Febres Cordero: el grupo del Banco del Pacífico, Noboa, Morisaenz, etc., se hace evidente y ofensivo para la de otros grupos y segmentos de la "libre empresa" cuyos intereses son sistemáticamente postergados y socavados por el favoritismo del Ejecutivo. Las políticas económicas, a pesar de su componente de austeridad monetarista hacia las clases subordinadas, se revisten de un aspecto de "festín" prebendario a nivel del capital. Es entonces cuando las propias bases de la legitimidad gubernamental frente a la clase que proclama representar

comienza a debilitarse, hundiendo en un cinismo creciente y anómico a quienes sólo un año antes creían llegada, por fin, la hora de la eficiencia y del imperio de las leyes impersonales de la economía política. Esto lleva a dos fenómenos: una retracción político-moral de los grupos intelectuales y empresariales más orgánicos de la derecha, y a una lenta y vacilante, pero no insignificante revalorización de la experiencia centro-izquierdista. Ahora, en grupos empresariales comienza a aparecer la noción de que si bien bajo el régimen estatista ellos no gobernaban, se podía crear un espacio de lucha entorno al problema iluminista de la voluntad general. Si bien la voluntad del Estado no era la propia, al menos podía presentarse como relativamente imparcial y neutra con respecto a personas. Esto daba las posibilidades de desarrollar un sentimiento colectivo de equidad y justicia, o sea constituirse como clase social en torno a un modo compartido colectivo de ver el mundo. El universo Febres-Corderista del favor y de la amistad, en cambio sólo podía conducir al canibalismo intraburgués; a la lucha darwiniana por el favor del Príncipe, que bloqueara y subvertiría los mecanismos de formación de un interés genérico de clase. El precio del poder ganado en estas condiciones, era para el empresariado ecuatoriano, su propia disgregación como actor unificado. El poder estaba de vuelta en sus manos, pero éste era de tal

género que disolvía subrepticiamente la mano que lo empuñaba. En el mundo del poder centro-izquierdista, en cambio, podía "centrarse" las voluntades de clase y constituirse en oposición a un Estado con vocación de impersonalidad, frente al cual por oposición y reflejo, el grupo social debía también a su vez centrarse e impersonalizarse para empujar su voluntad como colectiva, y por ende, clasista.

Este proceso se expresa en el súbito re-descubrimiento empresarial (parcial y aun minoritario, pero significativo si se compara con el período precedente de oposición tajante y unánime) de la Democracia Popular y de la Social-Democracia, y sobre todo de la persona del ex-Presidente Hurtado, quien pronto se convierte en el símbolo y aglutinante de la oposición al nuevo orden y ve su prestigio revigorizarse meteóricamente en el año siguiente a su abandono del Palacio de Carondelet. Asimismo, este proceso de recuperación de la DP, y en general centro-izquierda, se expresa en su excelente resultado electoral en las elecciones parlamentarias de 1986.

Pero el nuevo régimen no solo se ve amenazado por el resurgimiento de la centro-izquierda, y por las querellas sociales y políticas en que lo envuelven las alianzas que le dieron el triunfo durante 1984-85. Existen otros dos flancos que socavan las expectativas de que el gobierno de Febres Cordero pudiese convertirse en un punto de partida para una

hegemonía más duradera y "aggiornada" de la derecha empresarial.

El primero de ellos es el surgimiento pujante de un nuevo ciclo populista re-prestinado que gira en torno a la figura de Abdalá Bucaaram y del partido roldosista, y el segundo tiene que ver con el enfoque gubernamental de las relaciones cívico-militares y sus efectos dentro de la actitud de las FF.AA. hacia la política nacional.

Respecto al primer punto: cuando el Frente de Reconstrucción se acerca al populismo debe necesariamente optar por algunas de sus variantes. Fue posible (con muchas dificultades) hacer convivir al CFP y al FRA, pero tal maniobra se probó imposible respecto al roldosismo por varias razones: en primer lugar por disputas y feudos pre-existentes entre el FRA y el PRE y entre sus respectivos líderes. La codiciada alcaldía de Guayaquil interesaba vitalmente a ambos grupos, ya separados por la enemistad personal de sus principales líderes. Ambos competían por los mismos botines,y no era posible aliarse a uno sin romper con el otro. En segundo lugar, en el roldosismo persistía la presencia de todo un personal político asociado a las luchas de los regímenes de centro-izquierda de 1979-84 contra el cefepismo y contra la derecha. El FRA nunca se había comprometido ni con Roldós ni con el régimen militar, ni con el gobierno demócrata-popular. Por tanto carecía de costos

históricos para éste el asociarse con el Frente de Reconstrucción. El CFP, por su parte tenía ya una historia propia de colaboración parlamentaria y a nivel de gobiernos locales con la oposición tanto a Roldós como a Hurtado. En cambio el PRE arrancaba como disidencia del CFP y como desafío a la hegemonía de Assad Bucaaram dentro de la "familia" populista. Su compromiso público era con el régimen anterior, abiertamente con el Presidente Roldós (su epónimo) y más veladamente con Hurtado. Por otra parte el roldosismo, como movimiento neo-populista basaba su atractivo en la necesidad de re-pristinar el sistema de representación del mundo de las necesidades populares, en contra de los caudillismos más antiguos ya comprometidos con el "fango" del sistema. Cada fase ascendente del populismo ha buscado, con éxito, re-dinamizar su atractivo sobre la base de la denuncia de la igualmente inevitable claudicación de los líderes de la generación anterior. El roldosismo representaba esta fase "purista" y juvenil del populismo urbano, en oposición a la fase "bossista", de maquinaria y de consolidación prebendaria que de alguna manera se encarnaba en el CFP y en los cacicazgos velasquistas, arosemenistas y liberales. Esto es una repetición de la historia que el propio CFP viviera con respecto al "velasquismo" en los años 50 y 60, que el "velasquismo" desempeñara respecto al liberalismo en los años 30 y 40; y que el FRA intentara frente al CFP desde los años

70 antes de que el roldosismo le ganara la mano en los 80.

Estos factores determinaban una baja disponibilidad del roldosismo para alianzas. Por otra parte, en tanto partido nuevo, se hallaba interesado en "probar" su fuerza y potencial por sus propios medios, sobre todo por cuanto no se ocultaban las pretensiones de largo plazo de su líder, las que pasaban por conquistar la alcaldía de Guayaquil y evitar comprometerse con una coalición gobernante que fácilmente podría endosarle su desgaste llegado el momento de las elecciones presidenciales siguientes. De este modo se entiende el poco entusiasmo del roldosismo por plegarse a la estrategia del Frente y el hecho de que el propio frente no haya manifestado ningún interés por incluir al PRE en su "gran Estrategia" electoral y gubernamental. Más bien se trataba de fortalecer al CFP y al FRA como antídoto y alternativo al PRE, al menos en Guayaquil, y estos últimos calculaban que merced al apoyo del gobierno central y del botín prebendario podían competir eficazamente con un Abdalá sitiado en su fortaleza edílica en el puerto principal. La "defenestración" de Bucaaram a fines de 1985 pareció dar cumplimiento a dicha estrategia, pero la disputa sucesoria "canibalística" que se siguió, no hizo sino fortalecer la imagen del autoexiliado y prófugo alcalde, y llevar a su partido a una aplastante victoria provincial en las elecciones parlamentarias y seccionales de 1986. De este

modo, el segmento más dinámico y cercano al centro-izquierda del populismo (un populismo además de todo, doctrinariamente más "avanzado" que sus predecesores) quedó no solo al margen sino en antagonismo franco con el bloque que eligió a Febres Cordero y procuró proporcionarle los medios de llevar adelante su proyecto de gobierno.

El segundo gran problema que socava la proyección del gobierno del Frente de Reconstrucción Nacional, es el de las dificultades de Febres Cordero con el sector militar.

Estas dificultades arrancan de la ruptura que se establece entre el estilo político-militar de los gobiernos de centro izquierda y el nuevo "modus operandi" que establece la derecha con respecto al sector castrense.

Desde un primer momento, Febres Cordero dio a entender que no estaba dispuesto a respetar los pactos institucionales implícitos en la transición de fines de los años 70. El centro-izquierda se había comprometido a respetar los márgenes de autonomía y de institucionalización militar en el Estado; entregando a las FF.AA. grandes márgenes no solo de autodeterminación y de autogobierno de acuerdo a criterios burocrático-organizacionales internos, sino también ampliando y preservando (30) las áreas de la vida del Estado que quedaban bajo tutela más o menos directa de los militares: empresas estratégicas, organismos de seguridad, de movilización social, capacitación técnico-profesional, etc.

En otras palabras, se había consolidado el estatismo militar, despolitizándolo y dándole las herramientas para que pudiese afinar el imperio de un sistema de funcionamiento regido por normas y valores propios de un "ethos" burocrático-racionalista; mejor aislado que en el pasado de las formas familísticas de vida política y social aún muy fuertes en el ámbito civil.

Esta reinserción universal-estatista de las FF.AA. ecuatorianas se veía grandemente facilitado por la explícita voluntad de los gobiernos de Roldós y Hurtado por despolitizar la cuestión militar, y por establecer formas "objetivas" de relación gobierno-militares (31). La constelación valórica institucionalista y normativa de los roldosistas y demócrata populares se expresaba también en este ámbito bajo la forma de un esfuerzo por despersonalizar las vinculaciones entre poder ejecutivo y FF.AA. remitiendo los procesos de dirección militar a mecanismos formales y automáticos de tipo reglamentario, que fueron escrupulosamente respetados. Esta "neutralidad" civil era precisamente lo que los militares precisaban para recomponer la unidad corporativa y disolver los faccionalismos que habían amenazado seriamente su coherencia como cuerpo. En ese sentido la política de Roldós-Hurtado encontró un eco favorable dentro de las filas y les permitió volcarse a un proceso de modernización y de preparación para la defensa

frente a la reactualizada amenaza extensa representada por el Perú (incidente de Paquisha: 1981).

La llegada al gobierno del Frente de Reconstrucción Nacional puso fin a esta situación. Febres Cordero y la cultura política que él representa; ven en la institucionalidad impersonal y objetiva tan solo como un estorbo para la capacidad de liderazgo del gobernante. Apenas asumido el mando dio señales inequívocas de que era su intención desarrollar una activa intervención en la vida militar a fin de reestructurarla de acuerdo a los procedimientos tradicionales de corte clientelar. Para el nuevo presidente se trataba de asegurarse el control personal sobre la oficialidad desarrollando una "clique" interna que operara como clientela responsable ante él más que ante la corporación militar. Se trataba pues de romper la solidaridad de cuerpo propias del "ethos" burocrático, y reestructurarlas bajo la forma de lealtades personales orientadas hacia la persona del jefe ("boss"). En esto Febres Cordero no hacía otra cosa que aplicar a las FF.AA. la misma lógica dominante de la práctica política del patrimonialismo secular de las élites políticas y sociales ecuatorianas.

En este sentido debe interpretarse la promoción del Gral. Piñeiro a Ministro de Defensa, pasando por encima de la reglamentación constitucional al respecto y desarticulado, en

el proceso, el alto mando del ejército.

Asimismo, el esfuerzo por imponer su liderazgo personal y a oficiales "amigos" en puertos claves, llevó al gobierno Febres Cordero a una pertinaz política de favoritismos y prebendas dentro de las filas.

La reacción de la corporación militar no dejó de hacerse presente bajo la forma de un creciente y vago malestar. En la medida que el gobierno asentaba su política militar en la formación de cliques castrenses en deuda con el Ejecutivo; era preciso reforzar la vigilancia y la desconfianza hacia ella, y al mismo tiempo, iniciar una campaña ideológica destinada a presentar al presidente como el defensor del "honor" militar y de los valores castrenses.

Así, se asiste, por un lado a tendencias a privilegiar la formación de unidades especiales ligadas por una relación especial con el presidente; destinadas a ejercer un control hacia adentro de las filas y hacia la civilidad. Y por otra parte a un reforzamiento inusual de las policías y de los cuerpos de Seguridad Política, que toman de manera creciente una función represiva con amagos "cono sureños". El desarrollo de la ruidosa campaña de defensa del "honor" militar se ilustra y condensa en la deposición del alcalde de Guayaquil, Abdala Bucaaram en un incidente, probablemente fabricado, en el cual se lo hace aparecer como acérrimo enemigo de las FF.AA. El ejecutivo empuja a estas a

querellarse contra dicho alcalde, y a partir de ello obligarlo a autoexiliarse bajo amenazas de muerte concomitantes provenientes de grupos gangsteriles ligados a la presidencia (banda Toral Zalamea), que habían sido fuertemente perseguidos por el citado Bucaaram.

El despliegue publicitario y los aspavientos presidenciales en torno a ese "insulto" a la oficialidad buscaban generar en los cuarteles un clima de caudillismo presidencialista y apagar los rezongos de aquellos sectores profesionalistas del cuerpo de oficiales que no se avenían con esta resurrección de los fantasmas de la política militar del velasquismo y del viejo liberalismo pre-juliano.

La actitud de Febres Cordero en el incidente del secuestro del banquero Isaías puede inscribirse en ese intento de formarse una imagen de caudillo militar. El presidente asume el comando directo de las operaciones de cerco a los secuestradores, y contra la opinión de los oficiales del alto mando ordena el asalto a la casa donde estos se hallaban atrincherados con su rehén. El episodio terminó con la muerte de secuestrado y secuestradores, pero Febres Cordero salió con un aura de bravura, decisión y machismo que hubiese encantado a los soldados de un ejército de "montonera", pero que, aparentemente, no impresionó a la oficialidad profesional que se sintió arrastrada a un enfrentamiento amateur bajo la conducción de un civil

aficionado e ignorante de las técnicas más refinadas de liberación de rehenes, que la oficialidad creía poner en práctica.

En efecto, la lectura que de lo militar hace el jefe del ejecutivo, identifica lo castrense con el espíritu de bravuconada, audacia, valor físico, y con nociones de honor "hidalgo", que poco tienen que ver con el "ethos" militar-burocrático. Sin duda que el complejo valórico del honor es aún muy vivo, no solo entre los militares, sino en la sociedad civil. Pero éste se halla mediatizado y atemperado por el complejo burocrático-institucional, que lo inserta también como atributo institucional, "organizado", y ya no tan solo en el marco del ego encrespado del oficial singular. En cierta forma, los desplantes de Febres Cordero, más que presentarlo como un "hermano de armas" putativo, enfrentan a las FF.AA. con una imagen caricaturesca, desplazada y enajenada de su propia auto-percepción. En vez de congraciarse el presidente se sustituye, y se apropia indebidamente del "ethos" militar. No mantiene su lugar de civil y trastrueca el orden bilateral que separa a lo civil de lo castrense. El "charme" de un presidente civil, aficionado al tiro al blanco, la equitación y los deportes de milicia, tiene ese lado ambiguo: encanta en lo personal al oficial, pero le suscita el temor soterrado de un decentramiento de atributos militares que un civil, un

aficionado, amenaza apropiar para sí, disolviendo la laboriosa obra de especificación y formación de identidad profesional que el hombre de armas venía realizando desde los años 40 y 50.

De esta manera, la política militar de Febres Cordero está lejos de generar un consenso pro-gubernamental en las filas, tendiendo más bien a fraccionarlas y a alinearlas de manera virulenta en favor o en contra del presidente. La mezcla del clientelismo, desarrollo autonomizado de la seguridad política, civilismo caudillista y favoritismo hacia unidades y comandantes específicos, abren la vía para la eclosión de un fuerte movimiento militar de recuperación profesional y de defensa corporativa, que es representada por el gral. Frank Vargas Passos, el insurrecto Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

El motín de Vargas Passos estalló como una revuelta contra el prebendalismo desprofesionalizante personificado en el alto mando del ejército y sobretodo en el Ministro de Defensa, gral. Piñeiro. El planteamiento de Vargas halló amplio eco en la oficialidad y neutralizó los esfuerzos del ejecutivo para aplastar la revuelta en su primera fase, obligándolo a negociar y ceder parcialmente frente al jefe de la aviación. Sin embargo, fue evidente muy pronto que el ejecutivo no estaba dispuesto a cumplir con lo pactado, lo cual llevó a un segundo intento, que esta vez se tradujo en

un golpe militar populista pretoriano que contó con un inesperado apoyo de las organizaciones de masas y de importantes fracciones de las organizaciones políticas de izquierda.

Es curioso e interesante anotar que, si bien la revuelta de Vargas Passos se hace en nombre de valores "profesionales" y "burocráticos". Se apoya, en cambio, en métodos y en cuerdas de la sensibilidad popular y castrense que remiten a los fantasmas del caudillismo militar. El propio Vargas Passos resulta un personaje ambiguo. Militar ultra-profesional, y adalid del corporativismo tecnocrático castrense; es él mismo el vástago de una importante familia cacical de la Provincia de Manabí, con fuertes entronques familiares con los caudillos de la revolución liberal de Alfaro. Su abuelo fue un capitán de montoneras junto con Alfaro y Plaza, y su historia sigue las pautas del clásico "coronel" latinoamericano. Manabí fue para la revolución ecuatoriana de los 1890's lo que Sonora sería para México 20 años más tarde. Y sus "dinastías" familísticas liberales, jugarían aún hasta hoy un rol importantísimo en la política nacional.

En todo caso, Vargas Passos recurre a un conjunto heteronómico de mecanismos de lealtad hacia él: hay invocaciones profesionales, de liderazgo carismático sobre la tropa, de activación de sus recursos familísticos-cacicales

en Manabí (donde inicia su revuelta, y donde la población civil se moviliza para defenderlo de un posible ataque del Ejército), de demagogia "tribunicia" etc. Esta situación nos lleva a postular las mismas "paradojas" en la formación del personal profesional de Estado ecuatoriano, que las que constatamos en el estrato empresarial: una racionalidad moderna que se imbrica y articula en un apretado tejido, con funciones, orientaciones y esferas de necesidad propias más bien del mundo social del "honor" y de la reciprocidad familística. En este caso, la defensa de la "modernidad" castrense queda entregada en manos de una conducción cacical que moviliza los recursos de un patriarcalismo de base regional con raíces en la guerra de las "montoneras" liberales de fin de siglo, y en apelaciones populistas de masas. De este modo, lo "moderno" se enfrenta a los estilos de conducción política tradicional, levantando jefaturas que reproducen en sí mismas los modelos ancestrales de la política.

Sin embargo, Vargas Passos se vio maniatado por la renuencia de la centro-izquierda por ponerse detrás de su movimiento. El programa militar y los "instintos" políticos del Gral. sublevado se identificaba con las posturas de un centro-izquierda deflactado hacia el populismo. Prueba de ello, es que su movimiento y su figura fueron capitalizados con gran provecho por la Democracia Cristiana a

través de la figura del hermano de Vargas Passos, Gral. René Vargas Passos. Una de las figuras intelectuales del progresismo militar de los años 70, y prototipo del militar tecnócrata, "iluminado" y de sólida formación científico-humanista quien dio a la Democracia Popular los votos del clan Vargas Passos, de poderosa presencia familística en la provincia costera de Manabí.

Pero lo que impedía al centro-izquierda apoyar a fondo a Vargas Passos en la ocasión, era el apego histórico y el compromiso de sus partidos e intelectuales con la causa democrático-formal. Un desbordamiento popular-militar en nombre de un "ethos" democrático sustantivo pero confuso, amenazaba destruir todo el aparato constitucional-legal que daba sentido y soporte a su racionalidad de acción política. Podían verse enfrentados a perder las bases de su acción política a cambio del virtual plato de lentejas que un éxito militar podía proporcionarles en el corto plazo. Es esta misma devoción necesaria hacia las formas legales republicanas las que los dejaban relativamente inermes frente a la acción gubernamental para la cual el marco legal-institucional no era ni fuente ni objeto de legitimidad, y al que se enfrentaba dese una mera perspectiva prudencial. La centro-izquierda prefirió jugarse a fortalecer las empalizadas del Estado y para ello fue preciso desligarse del golpismo militar, re-normalizando en un registro centrípeto

la sustancia reivindicativo-simbólica que se insinuaba disgregante desde la aventura pintoresca y dramática del general amotinado.

Este cálculo ha probado ser acertado. La indudable cristalización de resentimientos y reivindicaciones que trajo el golpe de Vargas se canalizó luego en el espectacular triunfo de la Izquierda Democrática y en la prodigiosa recuperación de la Democracia Popular en las elecciones nacionales y parlamentarias de mayo de 1986. Pero además, dio jaque y neutralizó la política gubernamental de convertir al presidente en caudillo militar. La duplicidad y fanfarronada de Febres Cordero quedaron al descubierto por la acción de un militar, quien reapropia para las instituciones castrenses la imagen del honor quijotesco, del sacrificio y de la osadía hidalga; frente a la cual desmerece la del civil-presidente. Vargas Passos en prisión es un símbolo del honor vejado, más poderoso que la bufonería del honor que el presidente exhibe. La imagen caudillesca del presidente se desvanece, y debe asimismo sacrificar a sus más íntimos oficiales de cámara. El esfuerzo gubernamental por construir un poder militar extra-legal se ve casi por completo derrumbado, y se produce una reafirmación, al menos parcial de los valores y las prácticas profesionales y burocrático-institucionales. De ahora en adelante parece imposible que el presidente pueda contar con las FF.AA. para un proyecto

autoritario personalista, lo cual lo obligará más adelante a volverse hacia una frenética construcción de aparatos de seguridad civiles paralelos, en la que incorpora las gavillas gangsteriles porteñas, versiones urbanas de las guardias latifundiarias de otrora. Esto a su vez no hace sino reforzar el deseo militar de abstenerse de ulteriores compromisos con el ejecutivo, y de evadir hasta lo posible un involucramiento disolvente y faccionalizante en los problemas de seguridad interna, donde no hay un enemigo nacional claramente identificable, o de un poderío suficiente para presentar amenazas creíbles a la existencia de las instituciones armadas.

De este modo, la política presidencial aparece debilitada tanto frente a civiles como militares, y socavadas las bases de un continuismo potencial. Mientras que la opinión del electorado parece de nuevo abrirse a las alternativas estatistas y reformistas repudiadas parcialmente en 1984. La proximidad creciente de las elecciones presidenciales de 1988, la renovada mayoría parlamentaria opositora en la Cámara Nacional de Representantes, las caóticas relaciones políticas internas del Frente de Reconstrucción Nacional y de éste con los aliados "populistas", que hacen cada vez más ingobernable al gobierno; llevan a pensar que 1988 podría marcar el fin de la experiencia derechista en Ecuador, abriendo el paso a la hegemonía de las formaciones políticas

democráticas, estatistas, pluriclasistas y centro-izquierdistas.

Conclusiones

La dinámica de la escena política ecuatoriana de los últimos 15 años aparece marcada por un conjunto de conflictos de distinto orden y nivel, entre los cuales aquellos referidos a la lucha de clases ocupa un lugar secundario la mayor parte del tiempo. Más centrales aparecen aquellos que se vinculan a los referentes a la constitución misma de un espacio político nacional y aquellos centrados en torno a la cuestión de la racionalidad formal de la acción política y de formación de un estado racional-legal.

En este sentido el gobierno militar de 1972-78, y el gobierno civil que lo sucedió aparecen como expresión del esfuerzo de ciertas élites centralistas de Estado (militares y tecnocracia burocratizada) por consolidar la hegemonía de la racionalidad universalista en la constitución de un Estado constituído por formas de autoridad "modernas". La Constitución de 1978 expresa y cristaliza esta voluntad política.

El esfuerzo de reversión que a partir de 1984 se realiza por parte del gobierno del "Frente de Reconstrucción Nacional", combina un intento fallido de refundción empresarial católica y cosmopolita basada en valores

mercantiles y una, en definitiva, más fuerte y fundamental, reacción patriarcal caudillista que busca movilizar formas familísticas de hacer política y disolver en ellas los arduos esfuerzos del estatismo universalista precedente por constituir una sociedad política en forma.

Este proceso ha encontrado los límites que le impone la parcial modernización social ecuatoriana, pero, sobre todo las propias contradicciones entre un "ethos" empresarial clasista y las formas de redistribución de valores propios del populismo. Asimismo, se ha visto entrabado por la resistencia vigorosa de los aparatos militares profesionales ante los intentos de desbordamiento del caudillismo desde la esfera civil a la castrense.

Estas dificultades han sido no solo vividas como límite externo a la acción del gobierno del FRN, sino también como efecto de las antinomias y coexistencias valóricas eclécticas al interior de las clases, élites e individuos protagónicos en el proyecto refundacional del actual régimen.

Es posible pensar que como proyecto político concreto el actual esquema se halla agotado y en avanzada descomposición; sin embargo, parece claro que el conflicto en torno a la modernidad y la nacionalidad no estará resuelto en un futuro próximo, y que la futura lucha política ecuatoriana deberá todavía ajustar las cuentas pendientes entre el subjetivismo familístico y el universalismo legal-racional, las que

corroen por dentro no solo a la escena política misma, sino que a sus propios actores; sometidos a las tentaciones paralelas que ambas esferas de la identidad y de la acción les plantean a cada paso. No es posible saber antes de la acción, si un polo determinado logrará imponerse al otro, o si la solución final revestirá las formas sincréticas y ambiguas de la praxis hispano-andina.

NOTAS

1. Esta relación encuentra su forma canónica "clásica", en la Filosofía del Derecho de Hegel. Ver ibid. Buenos Aires, Editorial Claridad 1937. También, sobre esto J.J. Rousseau, El Contrato Social, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1961; K. Marx, Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel, México, Ed. Grijalbo, 1968 y Karl Marx, Friederich Engels; The German Ideology, New York, International Publishers, 1947. Para un tratamiento altamente sintético del debate marxista sobre el Estado y la Sociedad Civil, recomendamos Stanley Moore, Crítica a la Democracia Capitalista: Una Introducción a la Teoría del Estado en Marx, Engels y Lenin, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

2. El tema de las orientaciones hacia la acción ha sido tratado, y puede hallarse desarrollado explícitamente en la obra de Max Weber y sus seguidores; entre los cuales destaca Talcott Parsons. Talcott Parsons: Apuntes sobre la teoría de la acción, Buenos Aires, Amorrortu, 1970; Max Weber: Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1944.

3. Pierre Bourdieu, Esquisse d'une Theorie de la Practique, Ed. Droz, Geneve, 1972'

4. Marcel Mauss ha tratado esta lógica en su, en general tal dimensión de la práctica social de intercambio ha sido explorada por la antropología contemporánea. Ver M. Mauss, The Gift, Illinois, The Free Press, 1954. Llama la atención, que en Ecuador, los hallazgos y conceptos de la antropología social no hayan permeado la labor de sociólogos y cientistas políticos, al menos en la medida en que la naturaleza sustantiva del objeto de estudio haría recomendable.

5. Aunque el estudio de Burbano y Espinoza versa sobre los sectores poblacionales urbanos, sugiere claramente que el sincretismo que ellos descubren constituye un rasgo propio del "núcleo" mismo de la putativa "modernidad" nacional. Por otra parte, el nexo de su tema con la política puede hallarse en la pertinencia inmediata que la acción de los pobladores urbanos tiene para la política del "populismo".

6. Perry Anderson, "Transiciones de la antiquedad al feudalismo", México, Siglo XXI, 1980.

7. Ver Bourdieu, op.cit.

8. Mauss, op.cit.

9. El término "sistema de necesidades" lo tomamos de Hegel, op.cit., y nos parece más atingentes que el de intereses, puesto que remite fuera de las connotaciones de este último término, de acuerdo con las cuales, el objetivo perseguido aparece como un estrecho privatismo económico. El término hegeliano, por su mayor generalidad, y su desenganche de lo "sórdidamente materialista", nos permite más fácilmente intuir la disyunción entre el "interés" tal como se vive en la sociedad burguesa plena, y el "interés" como concepto problemático en una sociedad que no logra o no quiere reconocerse en las formas categóricas de la práctica de la modernidad.

10. Nuestro análisis utiliza sobre todo los siguientes trabajos sobre el citado período: Augusto Varas, Fernando Bustamante, "Los militares y la política en Ecuador", Quito, Edic. Latinoamericana, 1978; Anita Isaacs, From Military to Civilian Rule Ecuador 1972-79, disertación doctoral, University of Oxford 1985; Enrique Ayala Nura, "Política y Sociedad en el Ecuador republicano 1830-1980", en Política y Sociedad: Ecuador 1830-1980, Quito, Corporación Editora Nacional, 1980; Leslie Ann Brownrigg, "Interest Groups in Regime Changes in Ecuador" en Inter-American Economic Affairs 28, (1974); David Corkhill, "The Politics of the Military Regime in Ecuador: The Rodriguez Lara Regime 1972-76", Bulletin of the Society for Latin American Studies, No. 26 (March 1977); Agustín Cueva, "Del autogolpe de 1970 al nuevo régimen militar", en Economía, 61 (August 1974); José María Egar, Ecuador y el gobierno de la Junta Militar, Buenos Aires, Tierra Nueva, 1975. John Samuel Fitch, The Military Coup d'Etat as a Political Process: Ecuador 1948-1966, Baltimore, the John Hopkins University Press, 1977. Howard Handelman, "Ecuador: A New Political Direction", en Military Government and the Movement Towards Democracy in South America, Howard Handelman and Thomas Sanders, eds., Bloomington, Indiana University Press, 1981. Oswaldo Hurtado, Political Power in Ecuador, Alburquerque, University of New Mexico Press, 1980.

11. i.e. Agustín Cueva, op.cit. Varas y Bustamante, op.cit., Agustín Cueva, The Process of Political Domination in Ecuador, New Brunswick, N. Jersey, 1982; Patricio Moncayo, Grietas en la Dominación, Quito 1979.

12. Por ejemplo, ver Varas y Bustamante, op.cit., Luis Verdesoto, "Representación Gremial y Política de la Burguesía Industrial Ecuatoriana 1972-76", Tesis de Magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1978.

13. Anita Isaacs, op.cit.

14. Noción que subyace al Estado burgués en forma, y que halla su expresión teórica en las obras de Hobber, Locke, Rousseau.

15. i.e. Cueva, The Process of Political Domination, op.cit., Hurtado, op.cit.

16. El terrateniente ecuatoriano debía hacer una serie de prestaciones a la comunidad andina, tendientes a reproducir las condiciones de su existencia cultural y social. La relación terrateniente-campesina distaba mucho de ser meramente económico-contractual e implicaba obligaciones sociales y lealtades personales sumamente vigorosas. Carlos Arcos ha estudiado este fenómeno en una monografía inédita sobre un grupo de haciendas tradicionales en la provincia de Chimborazo.

17. M. Ostrugosky, La Democratie et l'organization des Partis Politiques, Paris, 1901.

18. J.S. Ficht, op.cit.

19. Ver Isaacs, op.cit.

20. Ver Varas, Bustamante, op.cit., Isaacs, op.cit.

21. Estas alternativas se hallan pormenorizadas en Vicente Martínez Fissau, "De la crisis de representación política de 1975 al establecimiento de un nueva régimen en el Ecuador: Análisis de la coyuntura 1976-1979", Tesis de Magister, FLACSO, Quito, 1980.

22. Escisión del CFP que sigue el liderazgo del Presidente Jaime Roldós en contra del caudillismo de Assaa Bucaaram.

23. En el sentido que da Bourdieu a este término. Ver Bourdieu, op.cit.

24. Aquí hacemos uso de una concepción sartriana de la "mala consciencia". Una idea referente a la acción o a la identidad propia que proporciona lal coartada de la naturalidad a lo que no es sino práctica constituida inerte pero ígualmente arbitraria, en tanto resultado de opciones tomadas históricamente.

25. Es necesario aquí referirse a los trabajos de Rafael Quintero y Liisa North sobre el populismo urbano de Guayaquil. Ellos resumen lo esencial de la polémica en torno

a la naturaleza del "cefepismo".

26. Ver el estudio de Fernando Bustamante, "Los partidos políticos del Ecuador a través de su ideología", en Ecuador a las Urnas, Luis Verdesoto, ed., ILDIS, Quito, 1984.

27. Ibid.

28. El espacio cultural que interpelaba el CFP en 1984 puede homologarse a lo que Rodrigo Cánovas llama "cultura de masas" en el contexto chileno. Es el mundo que en la prensa popular chilena activaba la práctica periodística de "El Clarín" hasta 1973. Ver Rodrigo Cánovas, Pasión y Razón en la Prensa Popular Chilena, Santiago, ILET, 1986.

29. Cánovas, op.cit., tiene un interesante tratamiento del sensacionalismo como expresión de la matriz cultural de lo popular de masas. Aquí utilizamos tal análisis como marco heurístico de referencia.

30. Sobre el tema de las relaciones cívico-militares en las transiciones a la democracia. Ver Augusto Varas, "Fuerzas armadas y transición a la democracia en América del Sur", FLACSO, Material de Discusión, octubre 1986.

31. La noción de un control "objetivo", impersonal de la esfera civil sobre lo militar puede remontarse a la influencia que en la "intelligentsia" política dedicada a reflexionar sobre estos temas tuvo el libro de Samuel Huntington, The Soldier and the State; the Theory and Politics of Civil-Military Relations, Cambridge, Massachusetts 1957, donde se utilizan y desarrollan tales conceptos de forma pionera.